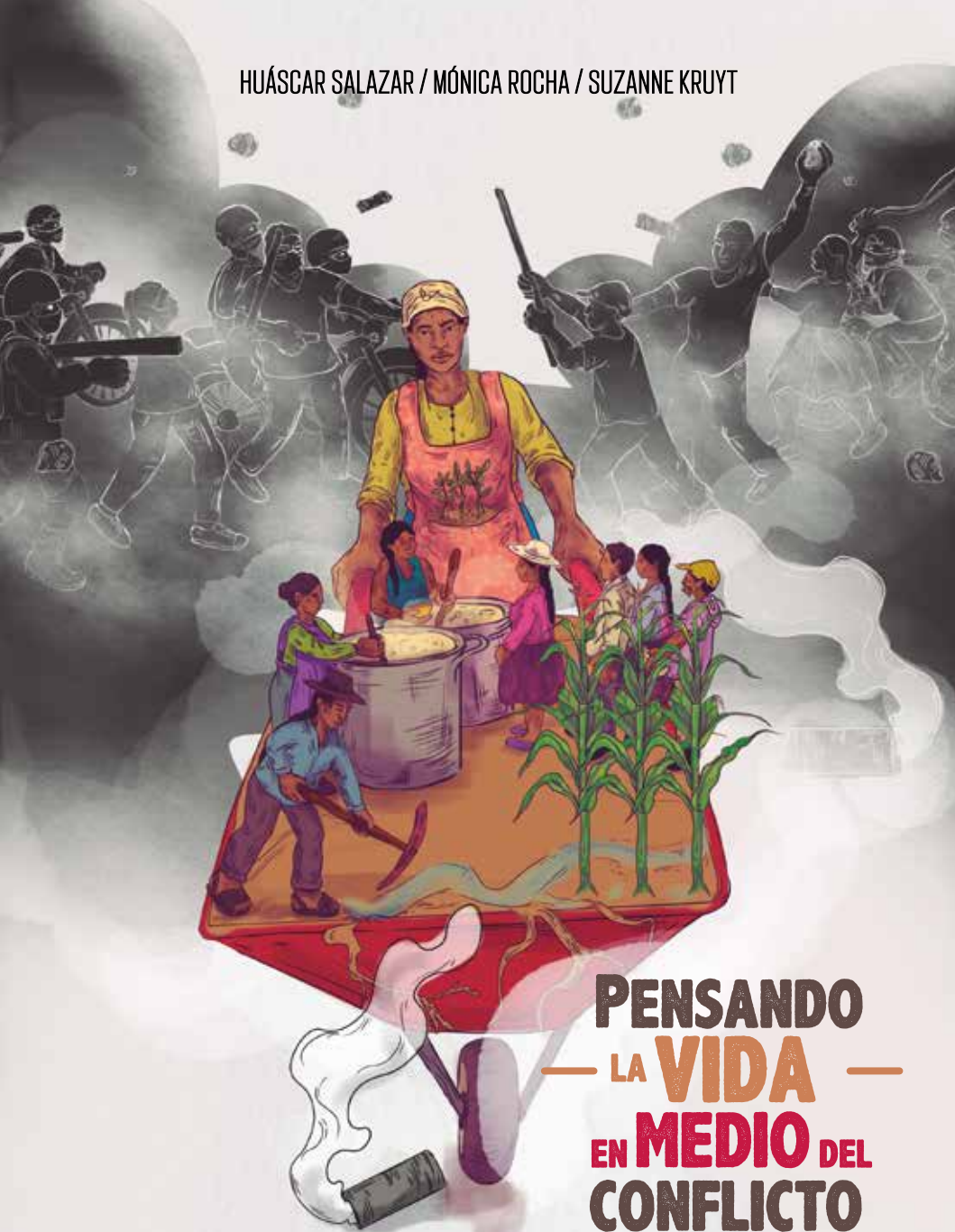


HUÁSCAR SALAZAR / MÓNICA ROCHA / SUZANNE KRUYT



PENSANDO
— LA **VIDA** —
EN MEDIO DEL
CONFLICTO

Un análisis de la conflictividad
sociopolítica cochabambina en
tiempos de polarización

CEESP

CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES

PENSANDO
— LA **VIDA** —
EN **MEDIO** DEL
CONFLICTO

HUÁSCAR SALAZAR / MÓNICA ROCHA / SUZANNE KRUYT

PENSANDO
— LA **VIDA** —
EN **MEDIO** DEL
CONFLICTO

Un análisis de la conflictividad
sociopolítica cochabambina en
tiempos de polarización

Pensando la vida en medio del conflicto. Un análisis de la conflictividad sociopolítica cochabambina en tiempos de polarización – Huáscar Salazar Lohman, Mónica Rocha Medina y Suzanne Kruyt – Cochabamba: Centro de Estudios Populares CEESP, 2022.

Diseño de portada: Adriana Herbas Cordero.

Cuidado de edición y corrección de estilo: Paola Mercado Mercado.

Diseño de interiores: Nelson A. Terrazas Vega

Primera edición 2022.

Autorxs:

Huáscar Salazar Lohman

Mónica Rocha Medina

Suzanne Kruyt

Edición:

Centro de Estudios Populares

Cochabamba-Bolivia

Contacto: epopulares@ceesp.org.bo

ISBN: 978-9917-9901

Depósito Legal: 2-1-2189-2022



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licencianta no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licencianta.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva del Centro de Estudios Populares y no refleja necesariamente la postura de la Fundación Rosa Luxemburg. Esta publicación es financiada con recursos de la FRL con fondos del BMZ (Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la República Federal de Alemania). Esta publicación o algunas secciones de ella pueden ser utilizadas por otros de manera gratuita, siempre y cuando se proporcione una referencia apropiada de la publicación original.

Contenido

Presentación: algunas consideraciones sobre tres claves de discusión política.....	7
Introducción.....	II
Capítulo 1.	
¿Desde qué claves interpretativas abordamos la conflictividad social en Cochabamba?	21
Claves conceptuales	21
Claves históricas: la historia de fragmentación de Cochabamba.....	30
Capítulo 2.	
¿Qué es lo que está en el <i>centro</i> de la conflictividad cochabambina?	43
La Guerra del Agua: poner la vida en el centro.....	45
Enero de 2007 y la crisis política de 2019: el estado en el centro	52
Desarmando el conflicto estadocéntrico.....	67
Capítulo 3.	
¿Qué agendas quedan invisibilizadas por la polarización?.....	71
Poniendo la vida en el centro de los haceres y de las luchas.....	72

Autogestión para el cuidado de la vida: premisa de estas organizaciones	74
Los problemas que enfrentan las Organizaciones Comunitarias de Base.....	78
A manera de cierre: agendas populares como <i>grietas</i> para una política alternativa.....	91
Bibliografía	97

Presentación: algunas consideraciones sobre tres claves de discusión política

Han pasado 22 años desde la Guerra del Agua, momento singular de movilización multitudinaria que, con la creación de la Coordinadora del Agua, abrió paso a todo el ciclo de levantamientos que culminaron con las denominadas “Jornadas por la Nacionalización de los Hidrocarburos” de mayo y junio de 2005. La época posterior, de sucesivos gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), estuvo marcada en su inicio no solo por la realización de la Asamblea Constituyente, sino por la transformación de todas las organizaciones sociales que habían propiciado la apertura del cambio a inicios de este siglo.

Si el 2000 fue fundamental para las articulaciones entre diversos actores sociales y, más de fondo, de diversas tramas comunitarias y populares, el 2019 se vivió una implosión que revelaba agudas divisiones y descomposición de dichas tramas. ¿Qué sucedió en estas dos últimas décadas en las que de la lucha social generalizada contra las transnacionales y el neoliberalismo en las guerras del Agua y por el Gas, se dio paso —como un ejemplo— al apoyo abierto y directo que han realizado este último tiempo las organizaciones campesinas departamentales y nacionales al ingreso de empresas petroleras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía? O, para situarnos en el mismo marco geográfico del presente trabajo, ¿cuál fue el tránsito político que permitió el enfrentamiento brutal de noviembre de 2019 en la ciudad de Cochabamba, entre fabriles y sectores campesinos cocaleros¹,

¹ Opinión, Cocaleros echan a los fabriles y toman por la fuerza la plaza 14 de septiembre, 06/11/2019

cuando el 2000 habían sido sectores que lograron labrar alianzas en torno al rechazo a la privatización del agua?

Esta pregunta política es abordada de manera fértil por lxs autorxs a partir de un despliegue de claves críticas de debate, que tienen a las luchas de base, comunitarias y populares, como principio central de comprensión. Así, aunque la lectura parte de las experiencias situadas en Cochabamba, puede ser asumida en un marco más amplio.

La primera clave se plantea diferenciar los momentos que aquí se denominan como de “efervescencia y lucha social”, en los que se la vida y su sostenimiento se colocan en el centro, de aquellos momentos de “confrontación”, donde el estado, junto a sus discursos y formas políticas opacas, se ponen en el centro. Esta distinción no es menor, porque alude a la historia misma de nuestras luchas y a la manera en cómo éstas se diluyen cuando se desatan olas de confrontación, mismas que van reduciendo la política a la polaridad violenta, al binarismo y a la simplificación.

La polarización entendida como una forma de gestión y estrategia política se tornó dominante, encubriendo los antagonismos sociales de fondo y reproduciendo el orden capitalista y patriarcal. En este marco, la segunda clave es la crítica profunda a estos reduccionismos pro-estatalistas desde una mirada compleja. La polaridad se ha labrado gracias a la destrucción de las formas orgánicas y asamblearias, en las que comunidades aglutinadas en entes de representación nacionales podían, hasta ciertos niveles, desplegar espacios y mecanismos de discusión y decisión, de control hacia lxs dirigentxs, y que habían sido fundamentales en los momentos de amplia movilización. Espacios que, sobre todo durante la última década, fueron sistemáticamente cercados, atacados y desconocidos por el estado en alianza con empresas privadas, pero también a través de otros mecanismos, por la

oposición partidaria al gobierno. Las organizaciones sociales se tornaron entonces en espacios corporativos y anquilosados, inmersos en un nuevo pacto con el estado. Las narraciones de personas de base de organizaciones cochabambinas, que se leen en las páginas que siguen, develan de manera explícita el proceso de descomposición profunda que desgarraba lo que había costado muertes y luchas tejer, desde hace varios lustros atrás. Todo esto mientras una fosilización de las estructuras dirigenciales iba a la par de la expansión de proyectos de despojo a lo largo y ancho de este país. En lo íntimo del desmoronamiento de la vida orgánica de las comunidades y organizaciones –paradójicamente durante el que se llamaba a sí mismo “gobierno de los movimientos sociales”– se halla el dispositivo patriarcal que se instauró como la nueva forma de una política dominada por figuras de dirigentes y caudillos.

La tercera clave del libro es la apuesta por recolocar en el centro las luchas por la vida y su sostenimiento. Constituye, por tanto, el llamado a desarmar no solo la polaridad impotente, sino la reducción patriarcal de todo lo que se considera “político” y “público”. El planteamiento sobre la importancia de todos los espacios reproductivos, donde en su mayoría son cuerpos de mujeres y feminizados los que sostienen las esferas de lo cotidiano, más aún en la coyuntura pandémica, es decir, implica otra forma de pensar horizontes de acción política. Que las personas de organizaciones de base identifiquen que el agua continúa siendo un bien sumamente escaso en Cochabamba, o que el sistema de salud –sobre todo el público– sea considerado absolutamente insuficiente, es uno de los aportes valiosos que muestra este libro, a modo de rearme de lo que nos había impelido en el 2000 a participar en las batallas por el agua.

Aunque no se desarrolle más este punto, al no ser uno de los objetivos centrales del texto, me gustaría añadir, a partir de lo señalado previamente, que las luchas que más han abordado este último tiempo el sostenimiento cotidiano de la vida y de la reproducción contra todas las violencias en Bolivia y otrxs territorixs, han sido las que acuerparon mujeres y feminismos diversos, que cuestionaron y cuestionan profundamente el patrón de acumulación capitalista y su avanzada de despojo extractivista, así como el orden político que se fundamenta en esa explotación y expropiación de entornos ecológicos de los cuales somos una parte. Orden signado por el acallamiento de la voz política de las mujeres y de la profundización de la mercantilización de nuestrxs cuerpxs.

Agradezco a Mónica Rocha, Suzanne Kruyt y Huáscar Salazar Lohman por la convocatoria a compartir impresiones alrededor de los planteamientos centrales de esta apuesta política importante que ahora se plasma en un libro.

Marxa Nadia Chávez León
Junio de 2022, La Paz

Introducción

El domingo 10 de noviembre de 2019, luego de que Evo Morales presentara su renuncia televisada en el marco de la crisis derivada de las elecciones presidenciales de octubre de ese año, el país se sumergió en uno de los momentos de mayor incertidumbre y confrontación de su historia reciente. Con una policía amotinada y en un clima de profunda polarización –que ya se había cobrado la vida de más de una decena de personas, en medio de discursos políticos radicalizados y de llamados a la violencia–, el *miedo* y la *confusión* se apoderaron del sentir de distintos sectores sociales que estaban en las calles. En algunas ciudades este clima fue particularmente tenso, en especial en La Paz, El Alto y Cochabamba, aunque otras regiones no quedarían atrás.

En la sede de Gobierno, la violencia se impuso de manera dantesca. Quizá las imágenes que más marcaron ese momento fueron los varios inmuebles incendiados, al igual que los más de 60 buses de transporte público Puma Katari, que corrieron igual suerte. También, los barrios paceños llenos de barricadas –frente a confusos rumores y mensajes por las redes sociales que señalaban inminentes enfrentamientos– eran una representación de la zozobra que se vivió en aquellos días². Y aunque se sabe que buena parte de estos hechos fueron premeditados, el mismo escenario político ha generado un manto de opacidad que impide obtener información fidedigna sobre las responsabilidades detrás de dichas violencias.

² La experiencia de la violencia suscitada entre el 10 y 11 de noviembre de 2019 fue particular en cada región. Para el caso de La Paz se puede consultar la nota: “Bolivia: La Noche de los cristales rotos” (Galindo, 2019) o la crónica de (Chaski Clandestina, 2019): “Un reporte vecinal desde la ladera oeste”.

En Cochabamba, por su parte, ese 10 de noviembre terminó de instalarse un clima de terror, mismo que había venido aumentando en las semanas precedentes, en las que la ciudad parecía haber quedado atrapada en una división irreductible entre “pititas” –quienes se oponían al gobierno de Evo Morales– y “masistas” –quienes apoyaban a ese gobierno–. División que, en buena medida y como se verá más adelante, fue inducida y alimentada sobre la base de un conjunto de heridas históricas que fueron instrumentalizadas en el marco de una reyerta por el poder político.

A la voz de: “ya vienen”, en el campo y la ciudad, en los barrios y las comunidades, vecinos autoorganizados se preparaban para responder a las agresiones esperadas desde el “otro bando”. En la mayor parte de los casos estas amenazas fueron rumores sin fundamento, empero, daban cuenta de la profunda ruptura social que se generó, ruptura que también tendría un rol fundamental en la violencia estatal que se desataría días después, y que tendría como corolario la perpetración de las brutales masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) por parte de la fuerza pública controlada por el nuevo gobierno de “transición”.

Cochabamba se consolidó como uno de los principales nudos del conflicto durante todo ese tiempo. A diferencia de otras regiones, donde la violencia recién estalló luego de la renuncia de Evo Morales, esta ciudad fue escenario de una tensión y violencia sistemática que comenzó desde el día posterior a las elecciones, y fue sostenida hasta cuando se firmó el “acuerdo de pacificación” entre el nuevo gobierno de Jeanine Añez y distintas organizaciones sociales, a finales de noviembre de 2019. Además, en esta ciudad emergió una dinámica particular de confrontación, que luego se propagaría: el enfrentamiento entre población civil.

Varios grupos vinculados a la oposición política operaron como aparatos parapoliciales, generando hechos violentos con un discurso clasista y racista. De la misma manera, otros grupos afines al gobierno también se organizaron bajo un esquema de promoción y sostenimiento de violencia. El común denominador fue el establecimiento de una dinámica política que empujó a la mayoría de la sociedad hacia una ficticia necesidad de tomar partido por uno de los polos en ese esquema de confrontación, como si aquel escenario fuese totalizante.

Esta no fue la primera vez que Cochabamba vivió un escenario de este tipo en lo que va de este siglo. En enero de 2007, en medio de una áspera confrontación entre la gobernación del departamento y el gobierno central, sectores urbanos y rurales terminaron en una batalla campal en el centro de la ciudad, lo que resultó en decenas de heridos y cuatro personas fallecidas.

Siendo Cochabamba un lugar donde también han surgido luchas tan fértiles, como aquella que conocimos como la Guerra del Agua en el año 2000, entender este tipo de violencia se convierte en una necesidad que no se puede evadir.

Mapa 1. Ubicación de Cochabamba en el territorio boliviano



Desde el Centro de Estudios Populares (CEESP), nos hacemos varias preguntas sobre el trasfondo de esta dinámica de violencia que tiene como asidero a Cochabamba. La primera y más relevante tiene que ver con los motivos que llevan a que en este departamento y, en particular, en su ciudad capital, se gesten, en ciertos momentos, esta escalada de violencia que termina enfrentando de manera directa a distintos sectores de la sociedad civil.

Pero, además, nos cuestionamos *sobre las diferencias entre este tipo de confrontación y aquellos conflictos que emergen en momentos de lucha y efervescencia social, interpelando efectivamente a las*

determinantes de la dominación y del poder, y que son luchas que también son representativas de la historia cochabambina. Este último cuestionamiento, en realidad, es nuestra inquietud de fondo, ya que es ahí donde esperamos encontrar algunas pistas para romper con la tan estéril dinámica de polarización política que neutraliza fuerzas sociales de transformación y acalla voces críticas.

Las respuestas a estos temas, sin embargo, no son sencillas y contienen diversas aristas, muchas de ellas históricas, que hacen eco de un pasado colonial y de estructuras jerárquicas sostenidas en la exclusión y desigualdad, además de la confluencia de múltiples actores sociales con gran potencia organizativa.

Pero también tienen que ver con una específica manera de gestión de la política boliviana que se ha gestado en la última década, sostenida en la profundización de una dinámica polarizante, dinámica que no ha significado modificar las estructuras de desigualdad social. Esta dinámica, tan instalada en la política estatal boliviana, se sostiene como un mecanismo que canaliza un conjunto de profundas contradicciones que son reales y sentidas en la cotidianidad social, así como también lo son las subjetividades derivadas de aquellas. Es decir –y esto es importante recalcar–, la polarización no es simplemente una creación artificial que se sostiene en simples apariencias. El racismo es un claro ejemplo de ello –no el único–. Gran parte del discurso polarizante en Bolivia se sostiene en una acentuación del racismo histórico que opera en la sociedad de este país; pero a la vez, ambos polos cuando están en el poder, en la arena electoral y en la disputa mediática, lo que hacen es recrear ciertas condiciones socioeconómicas para el sostenimiento de ese racismo, amplificando el desgarramiento colonial, instrumentalizándolo y azuzando heridas sociales de larga data.

Así, identificamos un gran contraste entre los recientes enfrentamientos entre civiles, marcados por disputas políticas que se producen en el Estado, y otros momentos emblemáticos de la historia de Cochabamba, como la denominada Guerra del Agua, que tuvo lugar el año 2000, cuando se puso sobre la mesa de discusión –principalmente desde estratos populares– un tema central ligado a la reproducción cotidiana de la vida –el agua– y, con ello, se interpeló el conjunto de desigualdades sociales producto del modelo neoliberal imperante en aquel entonces.

Es por este motivo que este trabajo se propone abordar las condiciones que dan pie a este tipo de violencia a partir de una explicación que va mucho más allá de los referentes explicativos propios de la coyuntura y de las narrativas polarizantes. Esta es una apuesta por una lectura desde la complejidad sincrónica y diacrónica.

Creemos que abordar esta cuestión desde este enfoque no es un desafío menor, ya que en este tiempo la polarización se ha convertido no solo en un problema circunstancial, sino en una estrategia política de control o disputa del poder. Es decir, se convierte en un fin en sí mismo para gobernantes y contendientes del poder estatal, sin importar las consecuencias que ello acarrea para la población. Es una estrategia que, finalmente, está anclada en la comprensión patriarcal y colonial del poder político y desde donde se termina reproduciendo un orden capitalista, que acentúa las desigualdades y agiganta la expoliación.

Así pues, concebir una salida crítica a la polarización implicaría poner en el centro los antagonismos sociales que realmente son causa de las desigualdades históricas de la sociedad –y no su reflejo polarizante–, antagonismos que principalmente se expresan en cuestiones que afectan directamente a la vida de las personas en su día a día. La atención no puede concentrarse –como sucede ahora– en la representación de un partido

político que se asume como apoderado de sectores populares en el Estado, o tampoco puede quedar inscrita en una discusión vacía sobre una democracia formal reproductora de ese conjunto de desigualdades históricas.

Debido a esto es que, en este documento, hacemos un esfuerzo por poner sobre la mesa de discusión algunas agendas reivindicativas de organizaciones comunitarias de base, las cuales han quedado invisibilizadas y relegadas a un segundo plano en el actual clima de confrontación política. Son estas agendas las que, en realidad, hacen eco de los antagonismos sociales más profundos e irresueltos de la sociedad cochabambina, en particular, y boliviana, en general.

En lo que concierne a la estructura del documento, se inicia en el Capítulo 1 con una explicación breve sobre las claves conceptuales e interpretativas de lo que significa *poner la vida en el centro* y la manera en la que entendemos la *polarización política*. A continuación, se presentan claves históricas donde se caracterizan algunos rasgos fundamentales de las estructuras dominantes sobre las que se erige la síntesis social cochabambina, muy vinculada –principalmente desde las élites– a un imaginario de mestizaje que siempre se ha tratado de identificar con el Estado nacional, como lo explica Silvia Rivera Cusicanqui (2018). Cochabamba ha sido –y en buena medida sigue siendo– el lugar desde donde se ha tratado con más ahínco de dar forma al estado boliviano a partir de la noción de mestizaje, que es sostenida por las élites regionales; a diferencia de las élites de otras regiones cuyo principal propósito ha sido la de recrear un país afín a sus intereses económicos: minería, hidrocarburos y, más recientemente, la agroindustria. De esta manera se entiende cómo Cochabamba es un polo de atracción de la conflictividad

estatal, atributo que, como se evidencia en el transcurso de este texto, será actualizado de distintas maneras a través del tiempo. Además, en las últimas décadas, la importancia relativa –en términos políticos y económicos– de sectores como el de los cocaleros del trópico cochabambino ha incrementado estas tensiones.

Partiendo de este particular escenario sociopolítico cochabambino, en el Capítulo 2 se genera un trasvase para una lectura combinada de lo que sucedió en Cochabamba en tres momentos emblemáticos de crisis política de la historia reciente del departamento. Para ello, se presenta una lectura de lo que fue la Guerra del Agua, un conflicto que puso el cuidado de la vida en el centro de la lucha popular, plasmado en semanas de movilización masiva y plural, defendiendo el acceso al agua potable y, así, logrando hacer frente a la política neoliberal privatizadora. Sin embargo, la conflictividad de la Guerra del Agua contrasta con los conflictos de Enero Negro de 2007 y de la crisis política de 2019, conflictos en los que lo que quedó en el centro fueron antagonismos por el control del aparato estatal y que terminarían plasmándose en grandes y violentos enfrentamientos civiles, que impugnaban poco o nada el orden dominante establecido.

Posteriormente, en el Capítulo 3, se problematiza la manera en que son asumidos los conflictos sociales que ponen en el centro la reproducción social de la vida. Para comprender a más profundidad la situación de los horizontes reivindicativos que emergen desde abajo, se presenta la situación de cinco organizaciones comunitarias de base de Cochabamba. Estas organizaciones –tres urbanas y dos rurales–, aunque muy diversas en su composición y su historia propia, tienen en común el vincularse con alguna dimensión de la reproducción de la vida,

con procesos de autogestión y formas de producción ligadas a las economías populares.

A partir de estos casos, el texto presenta una lectura crítica y propositiva sobre la importancia de actividades y luchas que de manera colectiva ponen la vida en el centro, no solo para el mejoramiento de las condiciones materiales y simbólicas de las personas que hacen parte de estas tramas organizativas, sino también como una estrategia situada para hacer frente a la estéril polarización política que desde la disputa por el estado intenta organizar la dinámica social. De la misma manera, consideramos que lo más útil –y de alguna manera refrescante– ha sido revisar lo que pasa *hacia abajo* con las organizaciones de base, sin quedarnos en una mirada centrada en el escenario nacional-cupular, donde se sostienen las narrativas dominantes que anulan o menosprecian las narrativas populares y, en especial, muchos haceres alternativos.

La centralidad de las actividades ligadas a la reproducción de la vida en las organizaciones comunitarias de base ayuda a poner en evidencia que existen agendas invisibilizadas, como es la sobrecarga de los trabajos de cuidado sobre las mujeres, la precarización laboral, la falta de acceso servicios tan básicos como el agua, las dificultades para la producción de alimentos, o la tan dramática situación sanitaria que ha quedado expuesta por la pandemia. Estas agendas, simplemente, y a diferencia del primer lustro de este siglo, no están siendo discutidas seriamente.

Nos alegra de sobremanera que en el proceso de elaboración de este texto hayamos encontrado que varias de las ideas acá presentadas o recuperadas resonaron e hicieron sentido a distintas personas con las que hemos venido dialogando y, en

especial, a las mismas organizaciones con las que hemos realizado este trabajo investigativo.

Queremos agradecer a quienes lo hicieron posible. En primer lugar, a las cinco organizaciones con las que hemos venido dialogando y a sus respectivas dirigencias: OTB San Nicolás, OTB Los Olivos, Asociación de Regantes Productores Pozo de Flores, Asociación de Educadoras y Manipuladoras de los Centros Infantiles Comunitarios de Cochabamba y al sindicato agrario de Chawpi Melga. También agradecer a Nelly Carrasco por haber apoyado en todo el proceso de recopilación de información y haber sostenido muchos de los contactos necesarios. A todas las personas que realizaron una lectura detenida del texto en sus distintas etapas y nos brindaron sus sugerencias, críticas y observaciones, en especial a Marxa Chávez, Luis Tapia, Raquel Gutiérrez, Eliana Quiñones, Lourdes Saavedra, Jorge Miguel Veizaga y a nuestras compañeras de trabajo: Daniela Toledo y Nelvi Aguilar. También quedamos en deuda con Adriana Herbas, por el potente diseño de la tapa, y a Paola Mercado, por la minuciosa revisión de estilo. De la misma manera, hacemos extensivo un agradecimiento especial a la Fundación Rosa Luxemburg (Oficina Región Andina), por el impulso y por haber brindado la posibilidad material para la realización de este trabajo. Demás está decir que la responsabilidad de todo lo acá expuesto corresponde enteramente a lxs autorxs.

Capítulo I.

¿Desde qué claves interpretativas abordamos la conflictividad social en Cochabamba?

Al ser un tema tan delicado el que abordamos en este libro, queremos partir haciendo explícita la manera en que entendemos la problemática planteada. Esto no solo como una necesidad de transparentar el proceso interpretativo, sino también de exponer ciertos recursos e ideas que intentamos poner en discusión para densificar los debates críticos en el contexto político actual.

Empezamos por reconocer dos claves conceptuales centrales que organizan el desarrollo del argumento de este documento: la primera tiene que ver con lo que entendemos por *poner la vida en el centro*; mientras que la segunda intenta complejizar la idea de polarización política. Posteriormente exponemos una breve interpretación de la historia cochabambina, tratando de entender de dónde proviene su particular dinámica conflictiva.

Claves conceptuales

En este trabajo hemos tomado dos hilos centrales para tejer una interpretación sobre la conflictividad de Cochabamba: por un lado, aquel que tiene que ver con la dinámica estatal polarizante, que termina afectando y desorganizando formas no estatales de socialidad; y, por el otro lado, se aborda actividades colectivas que tienen como propósito la reproducción de la vida y su potencia política en el actual contexto boliviano.

Para comprender un poco más sobre estos hilos a los cuales haremos referencia a lo largo del documento, planteamos en este apartado una caracterización conceptual –breve y sintética– de los mismos.

Poner la vida en el centro: por una política radical y crítica

Este texto intenta densificar y complejizar la comprensión de los problemas de fondo que están detrás de la conflictividad que se ha vivido en los últimos tiempos en Cochabamba, y, de alguna manera, también en todo Bolivia. Desde ahí se intenta repensar su especificidad y la manera en que se modifica su comprensión cuando es abordada desde una mirada que *pone la vida en el centro*.

Pero ¿qué implica poner la vida en el centro? Si bien desde muchos puntos de vista esta acepción pareciera una obviedad o, desde otras lecturas, un esnobismo posmoderno de los últimos tiempos, *poner la vida en el centro* es una propuesta epistémico-política radical –en el sentido de que sus implicaciones tienden a “afectar a la raíz”–. Representa un esfuerzo de aprehender, entender, operar y organizarse para hacer frente a una realidad social que se ciñe por la ley del valor, *i.e.* por la manera capitalista de organizar la vida que pone la *acumulación privada en el centro*, como fin último de la existencia humana y no humana. Poner la vida en el centro implica que es la vida lo que realmente importa, lo central del hacer humano. Por esto es por lo que cuando se pone la *vida en el centro* en este mundo que habitamos, también se pone en cuestión todo el conjunto de relaciones dominantes, las que tienen que ver con el capital y todas aquellas que se traslapan con este, como las patriarcales y las coloniales.

Asimilar esto en una sociedad capitalista tiene muchas implicaciones y parte por entender cómo se organiza una sociedad para hacer viable la reproducción social de la vida y

cuáles son las formas alternativas existentes –no prefiguradas ni inventadas–. Para ello es importante comprender que este trabajo en ningún momento se asume como neutro frente a la producción del antagonismo social. La lectura realizada parte de una apuesta que confronta explícitamente las relaciones dominantes y busca recuperar, crear o amplificar las condiciones políticas, materiales y simbólicas para dar cabida a una política que se preocupa y se ocupa de poner la vida en el centro.

Esto significa comprender que aquella capacidad humana de imprimir una forma a su socialidad –lo que Bolívar Echeverría (1998) denominó como *politicidad*– se gesta en torno a una serie de relaciones que son cultivadas con el fin de garantizar y decidir sobre asuntos relativos a la producción material y simbólica para dar curso a la vida biológica y social de una colectividad. Al conjunto de estas relaciones es a lo que se denomina como *producción de lo común* (Gutiérrez, Navarro, y Linsalata, 2016).

Lo importante es resaltar la diferencia entre *la forma comunitaria de gestión de la vida, en la que la decisión colectiva que se produce tiene el objetivo de organizar la actividad humana y la distribución del excedente social en torno a la reproducción de la vida. En contraposición: la articulación de la forma estatal como ámbito especializado de gestión de la decisión –expropiando y monopolizando la misma–, y la forma capital, en la que el hacer humano es subordinado a la lógica de producción del valor de cambio*. Esta distinción conlleva una serie de implicaciones epistémicas, teóricas y metodológicas en el momento de comprensión de los fenómenos sociales. Para los fines de este libro, acá se puntualizan cuatro de ellas, que son particularmente relevante para el contexto boliviano.

Primero, *la política no puede ser identificada únicamente con lo estatal*. La capacidad de decidir sobre asuntos públicos no es un atributo exclusivo del Estado. En todo caso, la relación estatal implica la

expropiación y la búsqueda del monopolio de esa capacidad de decisión. La capacidad de decidir sobre asuntos públicos que se gesta y se construye en diversas tramas asociativas es también una acción política, aunque una política que no puede separarse del hacer cotidiano en torno a la reproducción material y simbólica de la vida y, por eso, es una forma de decidir que adquiere una naturaleza distinta a la del Estado, no está enajenada. Esto también puede comprenderse como lo que Luis Tapia denomina *subsuelo político*, i.e. como “aquel conjunto de prácticas y discursos políticos que no son reconocidos social y estatalmente, pero emergen como forma de asociación, interacción y opinión sobre la dimensión política y de gobierno de las sociedades” (Tapia, 1998).

A esta política que emerge desde abajo, desde el día a día de la gente que se preocupa por hacer posible su existencia y que no depende –o no totalmente– del estado, como conjunto de instituciones que buscan monopolizar estas decisiones, es a lo que llamamos *política de la vida cotidiana*. Una política que implica una capacidad de coproducción colectiva de decisión para habilitar la posibilidad de reproducción social.

Esto nos lleva al segundo punto: *la política de la vida cotidiana* – que también podemos denominar *política de lo común*– no puede reducirse a la idea de una “comunidad ancestral” inalterada en el tiempo. La política de la vida cotidiana es una relación que se produce y actualiza cotidianamente y en distintos ámbitos de socialidad, la gran mayoría de veces como parcialidad. Pensemos en todos los haceres y bienes que usufructuamos y/o disfrutamos en la vida y que el capital no determina ni subordina completamente, y que, además, lo hacemos a partir de acuerdos que tejemos con otras personas en tanto colectividad, actualizando vínculos en el largo plazo.

El tercer punto: en tanto la política que emerge de la gestión común de la vida, no existe en estado de pureza, sino que en un mundo en el que la gestión del poder se organiza en torno a los Estados nacionales, *la política de la vida cotidiana* y la política estatal coexisten *tensa y contradictoriamente, permeándose mutuamente*, aunque es la estatal –desde su vocación universal-dominante– la política que trata de subordinar a la comunitaria, mientras que la comunitaria trata de trascender, esquivar, enfrentar, de-formar a lo estatal para conservar, producir o ampliar su propia autonomía y capacidad de decisión colectiva.

Es por este motivo que la política de lo común no necesariamente es anti-estatal –aunque sí puede serlo en ciertos momentos–, sino que es fundamentalmente *no-estadocéntrica*, es decir, una política que tiene como objetivo la reproducción de la vida y las decisiones que colectivamente se producen en torno a esa reproducción, para lograrlo muchas veces se sostiene una relación estratégica con el estado, pero siempre en aras de ampliar o defender el despliegue comunitario de la política. Ejemplo de ello: el lograr, a partir de diversas estrategias –habilitadas o no por el estado– la concreción de una ley que garantiza la soberanía política de un pueblo indígena, lo cual no debe ser entendido como un simple “reconocimiento” o “concesión” del estado, sino como un *límite* impuesto por la política comunitaria al estado en su propia cancha –generalmente a través de luchas de largo aliento–.

El cuarto punto que nos interesa resaltar en este momento es *el carácter femenino que adquiere la política de la vida cotidiana*. No se trata de esencializar ni de idealizar este tipo de política, sino de entenderla en su dimensión práctica. Lo que pasa es que en un mundo que organiza las relaciones sociales de manera patriarcal, históricamente la política estadocéntrica y los procesos de

acumulación de capital han quedado bajo el control de varones. En cambio, gran parte de las actividades relacionadas con la reproducción de la vida han quedado fijadas como un rol de género femenino relegado a un ámbito privado en tanto son presentadas como actividades “improductivas” (Federici, 2010). Es por este motivo que la política de la vida cotidiana tiene un asidero mucho más profundo en el hacer colectivo de las mujeres. Por eso es que encontramos la base de este pensamiento, centrado en la vida, justamente en las teorías feministas que parten desde una politización del ámbito privado.

Reflexiones sobre cómo opera la estéril polarización política

Intentemos entender cómo la dinámica polarizante opera como una forma de gestión de los antagonismos sociales, los cuales emergen de las contradicciones profundas que genera el orden dominante de una sociedad. Esta gestión tiende a inhibir, anular y/o neutralizar la capacidad social de modificar su realidad, trasladando los malestares sociales –pasibles de convertirse en sublevaciones y luchas con potencial transformador– a un plano en el que los mismos quedan inscritos y reducidos a un “posibilismo estatal” –i.e. los márgenes de acción social que permite el estado moderno–.

Este posibilismo estatal se sostiene en una apariencia fundante: la política es una confrontación de dos posturas ideológicas –representadas en partidos electorales, generalmente liderados por caudillos– que se disputan el control de las instituciones del estado, y –nuevamente en apariencia– todo queda codificado los términos de esta configuración binaria.

Cuando estos procesos de polarización derivan en dinámicas fascizantes, algunos segmentos sociales comienzan a operar como grupos paraestatales, recurriendo a la violencia desde

discursos ideologizados que no toleran ningún tipo de crítica. Esta violencia –física y simbólica–, además de convertirse en el modus operandi de una política vacía de argumentos, se ocupa de reproducir la apariencia de un mundo binario: “todo lo que no hace parte del polo al que pertenezco, corresponde automáticamente al otro polo y, por ende, debe ser atacado con virulencia”.

Lo paradójico es la funcionalidad de este mecanismo polarizante, que tiene que ver con cómo el patrón de acumulación, su dinámica expoliadora y los principales pactos de las clases dominantes y capitales externos terminan siendo sostenidos y resguardados desde ambos polos.

Otro tema para tener en cuenta es el que refiere a que, aunque esta confrontación aparece en el escenario oficial como irresoluble, en la esfera de lo extraoficial se mantienen distintos tipos de pactos entre quienes representan a los polos –los pactos patriarcales han sido los más evidentes en Bolivia durante los últimos años–, permitiendo negociar y gestionar las condiciones de la polarización como una estrategia de dominación compartida entre ambos polos.

Ello significa que, al final de cuentas, las condiciones de injusticia y desigualdad social terminarán por reproducirse, por lo que la tensión social derivada de los antagonismos se mantiene constante, y es desde ahí que se vuelve a simular la dinámica polarizante. Y así sucesivamente. En otras palabras, la polarización termina siendo, pues, una forma de gestión del antagonismo social que lo simula, pero también lo encubre, aunque en ningún caso lo resuelve, sino que lo reproduce.

Es importante, entonces, entender que hay un punto de partida que no puede desconocerse ni minimizarse. La polarización

conjuga una serie de reivindicaciones históricas de justicia e igualdad –en su mayor parte derivadas de largos procesos de lucha–, junto a la exacerbación de miedos, privilegios de clase y heridas históricas que muchas veces son puestas en el plano del nacionalismo o regionalismo. Negar esta base que subyace a los procesos de polarización representa negar distintas violencias, expoliación, despojo, racismo y discriminación. La polarización se nutre de los dolores, de las rabias y de los deseos de cambio, aunque los instrumentaliza para terminar afianzando otros intereses.

No se puede “despolarizar” así, a secas

Si se asume que la solución no pasa por navegar la polarización, es decir, situarse en uno de los polos de manera acrítica, reduciendo lo que sucede en el mundo a esta empobrecida manera de comprensión binaria de la realidad, el problema es: ¿cómo enfrentarla?

Para muchos la salida más obvia es la de simplemente generar un proceso de conciliación entre las posiciones encontradas: des-escalar la polarización. El problema es que esta postura desconoce el trasfondo de este fenómeno social, sus argumentos se sostienen en un conjunto de principios de la política liberal, aquella que –por lo menos desde el discurso– ha perdido bastante terreno en la última década y media, y que trata de reinventarse ante la angustia, miedo y cansancio que generan estos procesos de confrontación.

Es por esto por lo que las nociones universales abstractas que son utilizadas en esta búsqueda liberal despolarizante –“todos somos ciudadanos”, “el bien común por delante de las diferencias”, “debemos estar unidos en torno a la nación”, etc.– tienden a desentenderse de los términos del antagonismo social y, en todo

caso, intentan reestablecer como sentido común hegemónico el conjunto de espejismos –o formas aparentes– de las economías de mercado capitalista como condición indispensable de una “democracia moderna”.

Por tal motivo, desde esta postura se hacen llamados a una ilusoria unidad frente al polo que está en el poder. “Para ganar las elecciones ‘todos’ los candidatos de oposición deben unirse en una única fuerza”, enunciado que pierde de vista que en la mayoría de los casos ello implicaría ignorar un conjunto de violencias y contradicciones que perviven históricamente en lo más hondo de las sociedades y que, en muchos casos, hacerlo representaría atravesar ríos de sangre. En general, lo que suele suceder con este tipo de estrategias es que no hacen otra cosa que terminar afianzando y amplificando la dinámica polarizante, en la medida en que su noción de la democracia y la unidad se presenta como “única” alternativa.

La necesidad de complejizar la comprensión de la polarización deviene fundamental en el contexto boliviano actual. Su intento por totalizar la política del país luego de años de tanta violencia ha permitido desplazar a un segundo plano cualquier otra forma de política no estadocéntrica, neutralizando luchas históricas y horizontes de transformación social.

Es así como muchas personas, grupos, activistas, etc., se ven empujados a un lugar del silencio, ya que la crítica termina siendo codificada siempre en clave de esa frenética confrontación: “si me criticas, le estás haciendo el juego al otro”, o “estás conmigo o estás contra mí” –cuando, en realidad, muchas críticas van a lo más hondo de la configuración de este esquizofrénico escenario–.

Claves históricas: la historia de fragmentación de Cochabamba

A diferencia de lo que pasaba en otras regiones de Bolivia durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019, en Cochabamba no hubo un liderazgo sobresaliente que definiera de manera clara acciones coordinadas desde objetivos coordinados. Es decir, contrario a lo que se esperaría en un momento en que la política estatal totaliza la vida política nacional en torno a un conflicto, en la ciudad de Cochabamba, las mediaciones verticales que permitían gestionar este conflicto según estrategias políticas definidas funcionaron tangencialmente. Sin embargo, ello no impidió que el conflicto cochabambino escalara de manera alarmante y confusa desde el principio.

Entender por qué las cosas suceden así en Cochabamba es fundamental para dimensionar el carácter de la conflictividad que afectó al departamento, no una sino varias veces. Por un lado, implica reconocer una herencia histórica de una sociedad profundamente fragmentada. Por otro, señalar a unas élites –nuevas y viejas– que permanentemente se proyectan en el estado central, recreando para ello un conjunto de identidades e imaginarios coloniales que reproducen las condiciones de fragmentación en distintos planos sociales.

La historia larga de Cochabamba

La historia de Cochabamba siempre ha estado relacionada a los procesos socioeconómicos de otras regiones. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con su tipo de vocación productiva: la agraria. No por nada, desde un discurso mítico, siempre se denominó al departamento como “el granero de Bolivia”.

El departamento de Cochabamba está conformado por un conjunto de pisos ecológicos, que van desde la zona tropical en la región del

Chapare hasta el altiplano andino, el centro económico de la región está conformado por tres valles concatenados (alto, central y bajo), donde en la actualidad se encuentra buena parte de la mancha urbana de la ciudad de Cochabamba. En la historia regional, estos valles se han caracterizado por ser altamente productivos en alimentos. Desde la época precolonial fueron la “base física sobre la que prosperó el cultivo del maíz destinado al consumo de sociedades densamente pobladas que se asentaron en el altiplano y la unidad geográfica donde se asentó el poder regional” (Gordillo, Rivera, y Sulcata, 2007: 4). Cuando el imperio Inca tomó el control de las regiones aymaras, lo que ahora son los valles de Cochabamba se convirtieron en un centro de *mitimaes* controlados por el poder inca, desplazando a buena parte de aquellos que respondían a las comunidades aymaras del altiplano.³ Así, los nuevos *mitimaes* se encargaban de abastecer, principalmente de maíz aunque también de otros productos, a las estructuras de poder incaico (Gordillo et al., 2007).

Es llamativo que ya en medio de las disputas incaicas y aymaras, este territorio haya sido ocupado por un conjunto de habitantes que eran delegados y temporales; es decir, provenientes de otros territorios que, por lo general, no se quedaban a vivir de manera permanente. Cuando la colonia llegó a estos valles, se encontró con un *collage* de comunidades, muchas de ellas independientes entre sí, aunque conectadas territorialmente. No se puede hablar de la existencia de un pueblo con identidad propia y un sistema productivo integral.

³ Se llama *mitimaes* a grupos o comunidades correspondientes a un determinado pueblo que eran asignados a cumplir una determinada tarea por un periodo de tiempo establecido. Esta figura de la *mita* en los pueblos andinos debe entenderse, además, desde el esquema de organización social del control vertical de un máximo de pisos ecológicos, que permitía a un mismo pueblo controlar distintos pisos ecológicos sin que existiese una continuidad en su territorio. Para profundizar al respecto se puede consultar el trabajo de John Murra (1975).

Desde la colonia hasta muy entrado el siglo XX, Cochabamba cumplió la función fundamental de abastecer de alimentos a los centros mineros del país. El sistema productivo de hacienda colonial se sobrepuso al esquema preexistente de la *mita* y lo transformó a partir del sistema de *encomienda*. Por el siglo XVI, los primeros hacendados fueron encomenderos poderosos, los cuales se dedicaban de manera paralela a la actividad minera y a la producción de alimentos en los valles de Cochabamba (Jackson y Gordillo, 1993).

Sin embargo, este primer esquema de hacienda con el tiempo se abrió paso a una hacienda menos poderosa, también controlada por familias españolas, pero con menos músculo económico. Estas familias se convirtieron en terratenientes, aunque su actividad estaba signada por los requerimientos de la minería. En este tiempo, además, sucedió algo sin precedentes: las brutales condiciones de producción minera afectaron considerablemente la mortalidad de la población andina, por lo que muchas comunidades evitaban participar en esta actividad a toda costa. Es por este motivo que se volvió a reinstalar la *mita* toledana, un sistema de trabajo obligatorio –que usurpaba el nombre de la *mita* precolonial– por medio del cual las comunidades debían mandar cierta cantidad de trabajadores varones a las minas. En ese contexto, las haciendas de Cochabamba disputaron la fuerza de trabajo de comunidades, en muchos casos, convirtiendo a comunarios en *yanacunas* –sirvientes de las haciendas– en mutuo acuerdo con estos, ya que de esta manera podían evitar el trabajo de la *mita*.

Algo que también influyó en el escenario sociopolítico regional es que, a diferencia de los primeros hacendados, estos últimos tenían menos recursos y se vieron en la obligación de financiar sus actividades con préstamos, muchos de los cuales provenían

de la iglesia y también de grupos familiares de curacas indígenas vinculados a la producción minera (incluso se constataron alianzas familiares entre hacendados y estos grupos de poder económico indígena). Es así que la región de Cochabamba, durante la colonia, se fue convirtiendo en un complejo espacio de alianzas y disputas entre distintos sectores sociales, españoles, mestizos e indígenas (Gordillo et al., 2007).

En la era republicana muchas cosas cambiarían para Cochabamba, aunque lo sustancial se mantendría similar a la época colonial, por lo menos hasta las postrimerías del siglo XIX:

Durante las primeras décadas de la vida republicana (1830-1880), en las que el Estado aplicó políticas proteccionistas en Bolivia manipulando artificialmente el valor de la moneda, la agricultura cochabambina aprovisionó de maíz y trigo a las ciudades y centros mineros del altiplano, junto a toda una gama de productos artesanales de baja calidad por la tecnología productiva empleada. Tocuyos, jabones, pólvora, objetos de vidrio, elaborados por miles de artesanos en los valles se colocaban en los mercados de occidente y generaban ingresos y empleos a la región (Gordillo et al., 2007).

La hacienda cochabambina reproducía un esquema productivo agropecuario parasitario, en el que prácticamente toda la presión recaía sobre los aparceros, quienes se encargaban de la producción, mientras los latifundistas se mantenían como rentistas, sin generar procesos de inversión ni innovación, lo que a la larga cobraría factura.

Las políticas de librecambio promovidas por el modelo minero exportador, que tuvo un nuevo ciclo de bonanza en la penúltima década del siglo XIX, tuvieron un efecto fulminante sobre la economía cochabambina. Las fronteras se abrieron a la importación de distintos productos alimenticios, los cuales

no solo eran mucho más competitivos que los producidos en los valles cochabambinos, sino que también solían ser de mejor calidad. Estos productos llegaron a los centros urbanos del occidente del país, a través de la red ferroviaria que se había implementado para beneficiar los intereses de las grandes mineras.

Esta etapa coincidió con la implementación de la Ley de Exvinculación presentada por el gobierno central, mediante la cual se arrebataron tierras indígenas en un intento de individualizar su propiedad y distribuir excedentes a los hacendados. Sin embargo, en Cochabamba, y ante una debilitada y poco competitiva élite, fueron los pequeños propietarios, denominados como *piqueros*, los que aprovecharon para hacerse dueños de esas tierras. Es así como, poco a poco, se fue fortaleciendo un sector campesino propietario que comenzó a derruir el poder de los grandes hacendados, menoscabando también su legitimidad simbólica y política (Rodríguez, 1995).

Años después, la frustración generada por la Guerra del Chaco al interior de la sociedad boliviana dio lugar a un impulso de impugnación del orden dominante establecido, que en ese entonces estaba liderado por “la rosca” minera del estaño. Este malestar también impregnó a la sociedad cochabambina y dio lugar a una división al interior de las propias élites; por un lado, los patriarcas agrarios que buscaban sostener el viejo modelo de la hacienda ligada a la producción minera; mientras que, por el otro, estaban los jóvenes que miraban hacia una sociedad capitalista avanzada, así como grupos de intelectuales tomaban partido por ideas revolucionarias de izquierda.

Como señala la ilustrativa investigación de Laura Gotkowitz (2011), en toda la época de la posguerra y en especial en la década de los cuarenta del siglo XX, un conjunto de movilizaciones,

muchas de las cuales tuvieron su epicentro en Cochabamba, comenzaron a corroer las estructuras de poder existentes. Campesinos, indígenas y colonos establecieron alianzas para luchar; en búsqueda de la recuperación de autonomía política y control sobre las tierras. Las rebeliones indígenas que antecedieron a la Revolución Nacional de 1952 y que, si bien con el tiempo quedarían capturadas por el Estado de la Revolución Nacional, fueron luchas de un carácter profundamente disruptivo, que minaron la estructura de poder del Estado oligarca que había primado desde la independencia.

Luego de la Revolución Nacional, “las elites de poder terrateniente fueron muy afectadas [...] y no volvieron a recomponerse más” (Gordillo, 2007). Cochabamba fue el departamento en el que la distribución de la tierra tuvo un mayor alcance y buena parte de este proceso se dio sobre los avances que los sectores campesinos ya habían logrado en momentos anteriores. No es que las élites desaparecieran, ni mucho menos, sino que terminaron convirtiéndose en grupos encapsulados, clanes familiares que llegaron a controlar alguna dimensión de la economía cochabambina, principalmente aquellas relacionadas con la industria y con los servicios. Aunque, en términos relativos a los capitales paceños o, en la actualidad, a los cruceños, siempre fueron de menor envergadura.

Es entonces cuando las élites regionales construirán un vínculo particular con el Estado. Al haber visto disminuido su poder e influencia económica, gran parte de ellas se dedicarán a la actividad política como medio de sobrevivencia y de producción simbólica de legitimidad, aunque –como veremos un poco más adelante– siempre reproduciendo los imaginarios y jerarquías de un colonialismo interno. Este hecho marcaría a Cochabamba, convirtiéndola en una de las principales canteras de políticos

interesados y vinculados con el estado central, lo que es un elemento fundamental a la hora de comprender Cochabamba, desde sus élites e intelectualidad, como lo anotan Silvia Rivera Cusicanqui y Virginia Aillón:

...lo *cochabambino* [puede entenderse] no solo como espacio geográfico sino como metáfora de la idea misma de *centralidad*, punto de partida necesario para cualquier reflexión sobre los márgenes. Este uso metafórico nos ayudará a descifrar esa especie de devoción por las fuerzas centrípetas del Estado, ese deseo anhelante de tener un centro, que se da en el contexto de una realidad masiva de expulsiones y exilios hacia los márgenes. En efecto, Cochabamba es el departamento que lidera las cifras de emigración interna y transnacional, y a la vez es el lugar de origen de los intelectuales y políticos que han predominado en la escena estatal y han formulado las políticas públicas más relevantes del último medio siglo (Rivera y Aillón, 2015).

Además, esta mirada mestiza de las disminuidas élites cochabambinas tiene una vocación estadocéntrica:

Develamos las pulsiones de centralidad del patriarcado *qhochala* y vemos cómo a través de ellas se articula, o se pretende articular, a la totalidad social boliviana en un proyecto concebido desde un fragmento muy pequeño de esa sociedad: ellos mismos. Al igual que sus predecesoras oligárquicas, esta élite mestiza es reducto de un mestizaje colonial. Eso hace que se nieguen otras formas y que se produzca una especie de eclipse sobre la *choledad* como un hijo de mestizo que pudiera tener algo que decir en términos de descolonización (Rivera, 2018).

Esta dinámica no solo moldeará gran parte de la dinámica colonial del Estado boliviano, tratando de imprimir esos imaginarios estatales de corto alcance y que no harán otra cosa que convertir al estado boliviano en un *Estado aparente* (Zavaleta, 1986), sino

que también se convertirá en una correa de transmisión de la conflictividad estatal hacia las geografías del departamento cochabambino.

La emergencia del movimiento cocalero

Antes de concluir esta breve mirada genealógica de la dinámica política cochabambina, es importante señalar brevemente la emergencia de un actor social que se volverá central en la historia reciente del país: el movimiento cocalero.

Para mediados de la década de los 80 del siglo XX –cuando el modelo de capitalismo de estado llega a su fin en Bolivia, para dar lugar al expansivo modelo neoliberal– Cochabamba seguirá acentuando su complejidad social: un campesinado minifundista que terminará por consolidarse en todo el escenario rural del departamento; nuevas élites ligadas a este conjunto de economías populares, principalmente comerciantes y muchas veces subterráneas; unas élites tradicionales nostálgicas y muy ancladas a imaginarios de mestizaje y blanquitud, con alguna presencia en distintos sectores de servicios pero sin un alcance económico comparable a otras élites del país; y nuevos sectores sociales en emergencia. El nuevo sector representativo de este momento fue el de los productores de hoja de coca, en la región del trópico cochabambino.

La configuración del Chapare –trópico de Cochabamba– como núcleo productivo de la hoja de coca tiene una historia reciente, a diferencia de la región de las Yungas de La Paz, que tiene una historia de producir coca que se remonta a antes de la colonia. El trópico de Cochabamba puede considerarse como una zona de colonización a la que llegaron habitantes de las tierras altas en distintas olas de migración económica. Algunos años antes de la Revolución Nacional, el Chapare habría de recibir a

las primeras familias mineras, las cuales llevarían consigo el modelo del sindicalismo minero. Este modelo fue incorporado a la lógica organizativa en el momento en que empezaron a aparecer los sindicatos cocaleros en el año 1953, los cuales, a su vez, se verían potenciados por nuevas olas migratorias resultado de la Revolución Nacional y de la Reforma Agraria. Inicialmente muchas personas migraron de la región andina debido a los problemas socioeconómicos derivados de la eliminación de la hacienda y la repartición de tierras, pero luego, desde los años 60 hasta el retorno de la democracia, se producirían procesos de colonización inducidos y condicionados por el propio estado.

En este contexto surgirían una serie de demandas sociales – económicas y políticas–específicas de este sector cocalero; no solo se demandaba la libre posibilidad de plantar la hoja de coca, la eliminación del impuesto e intereses, sino que también se demandaba la construcción de caminos, escuelas y demás infraestructura. Poco a poco los sindicatos se fueron asociando como medio de resistencia y de articulación de demandas. En 1968 se creó la Federación Especial del Trópico –era “especial” porque se articulaba directamente a las estructuras nacionales sindicales y no a la federación campesina departamental de Cochabamba–. Con el tiempo, y en medio de una turbulenta historia de disputas y alianzas, surgirían seis federaciones que darían cuerpo a la estructura sindical del trópico cochabambino que hoy conocemos (Albó, 2009; Patzi, 2007; F. Salazar, 2008).

La historia del movimiento cocalero, no es posible entenderla sin sus luchas y la represión que afrontaría. El año 1961, Víctor Paz Estenssoro firmó la Convención de Viena, comprometiéndose a erradicar la producción de coca antes de 1985. Empero, en ese periodo la producción no haría más que incrementarse y la erradicación no llegó a ser una política sistemática hasta el año

de 1986, cuando la presión de Estados Unidos obligó al gobierno de Paz Estenssoro a tomarse la erradicación en serio. Ese año se diseñó el Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico, el cual conllevaría inicialmente un proceso de erradicación voluntaria; pero también la creación de un Programa de Interdicción con sus respectivas instituciones represivas, para lo cual se declaraba al Chapare como “zona militar” y, finalmente, se imponía un modelo de erradicación forzosa. Poco después se diseñaría la famosa Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, conocida como la Ley 1008, por medio de la cual se etiquetó a la región del Chapare como una región excedentaria en la producción de coca y, por tanto, se conminaba a la sustitución de la hoja de coca por otros productos.

Es ante la inminente aprobación de esta ley, en 1988, que la organización cocalera inició un proceso de resistencia movilizada, la que fue brutalmente reprimida en la denominada Masacre de Villa Tunari, con un saldo de ocho muertos y medio centenar de detenidos. La reacción fue una masiva marcha de 20 mil productores de coca –como ellos se hicieron llamar–.

Es desde este momento que el movimiento cocalero se potenciará de distintas maneras: la primera fue el proceso de construcción de un sindicalismo unificado en el Chapare, para lo cual se erigió la Coordinadora de las Seis Federaciones.

La segunda fue la creación de un discurso en torno a la hoja de coca, argumentando que ésta no era un estupefaciente, que tenía un contenido sagrado y comunitario, que los que la producían no podían vivir con los productos sustitutivos de la coca porque no eran rentables, y que defender la coca era defender la soberanía nacional frente al militarismo y al imperialismo norteamericano.

La tercera fue la construcción, bastante pragmática, de alianzas a distintos niveles, de diferentes contenidos y con distintos actores, ya sean estos del país o del extranjero, así pues, en unos pocos años el movimiento cocalero había logrado construir una red de apoyo sin precedentes.

La cuarta fue apropiarse de espacios estatales locales. La Ley de Participación Popular había descentralizado el poder estatal y los cocaleros no dejaron pasar la oportunidad, con este fin crearon el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y que, si bien no tendría personería jurídica, permitiría generar alianzas con partidos dispuestos a prestar la sigla. Así pues, para 1995, con la sigla de Izquierda Unida (IU), ganaron diez alcaldías en el Chapare y dos años más tarde ganaron cuatro diputaciones nacionales. Para 1999 el IPSP adquiriría una sigla propia, la del Movimiento Al Socialismo (MAS), con la cual obtuvo el 3.2% de la votación nacional en las elecciones municipales de ese año.

La quinta manera en que el movimiento cocalero se potenció fue a través de la movilización sistemática. A medida que los gobiernos neoliberales transcurrían, las medidas contra la producción de coca se intensificaron, paralelamente a ello, las movilizaciones cocaleras se masificaban con bloqueos y marchas, las cuales ya contaban con un discurso que legitimaba su lucha, con el apoyo de aliados importantes y con sus propios representantes en los municipios y en la cámara de diputados.

Vale la pena tener en cuenta la lucha del movimiento cocalero y su vigorosidad en la última década del siglo pasado, ya que este sector se convertirá en sujeto de gran calado de la historia reciente de Cochabamba y será fundamental para comprender las luchas venideras que conformaron el campo de disputa política en la Bolivia de este siglo (Gutiérrez, 2009). Pero, además, su historia es particular, porque si bien surge de un proceso de luchas

y resistencias, que en gran medida tenían que ver con el cuidado de la vida de quienes hacían parte del sector, dedicado a la producción de un producto considerado mínimamente rentable en aquel entonces, con el tiempo este sector volcará todos sus esfuerzos hacia la toma del poder y la concreción de privilegios para sus élites dirigenciales. Esta transición de la política centrada en el cuidado de la vida hacia una política estadocéntrica, representa una clave interpretativa que ayuda a comprender un conjunto de fenómenos sociales que se harán evidentes en el presente.

Con todo, el departamento de Cochabamba llegará a inicios del siglo XXI con un sector cocalero fortalecido, un sindicalismo campesino y de regantes con una gran presencia política –aunque muchas veces ensimismado en su propia problemática–, y a una transformación importante en el ámbito popular urbano. Para finales del siglo XX, la urbe cochabambina llegó a ser el espacio más densamente poblado del país (más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado) (Urquiola, 1999), como resultado de la migración campo-ciudad por la baja productividad en el área rural, lo que significó el crecimiento acelerado de barrios populares en la ciudad de Cochabamba, aunque con poco o nulo soporte de las instituciones públicas (Ledo y Agost Felip, 2013).

Las nuevas articulaciones económicas –que con el tiempo produjeron sus propias élites– habrían de disputar muchos espacios de poder económico a las élites tradicionales y también impugnaron al Estado boliviano por su falta de presencia en la actividad económica en la región. Ello dio lugar a que Cochabamba se convirtiera en un espacio geográfico con un elevado grado de conflictividad social, siendo las carreteras del departamento y las calles de la ciudad los lugares donde esta conflictividad hizo carne: marchas, bloqueos y, posteriormente, enfrentamientos entre sectores de la misma sociedad civil.

Capítulo 2.

¿Qué es lo que está en el centro de la conflictividad cochabambina?

Durante lo que va del siglo XXI, tres momentos históricos, separados entre sí por varios años y en coyunturas distintas, marcaron de forma duradera la conflictividad cochabambina. En estos episodios, la ciudad misma se convirtió en un espacio geográfico disputado por distintos actores de la sociedad civil y por las propias fuerzas represivas del estado. Aunque, como veremos, son conflictos que tuvieron diferente naturaleza.

A pocos días de iniciarse el siglo XXI se daría lugar al primero de estos momentos. La hasta entonces arremetida neoliberal se encontraría con un límite en la sociedad boliviana: *la Guerra del Agua*. Ese hecho marcaría, además, el inicio de uno de los ciclos rebeldes más importantes de la historia reciente del país, mismo que duraría hasta el año 2008, cuando se cerró el proceso constituyente. Entre medio dos hitos serían derrocados dos presidentes neoliberales y se llevaría al Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno.

Pese al fragmentado escenario social Cochabambino –aunque también se puede considerar como producto de este y de la recurrente dinámica de enfrentamiento al poder desde los sectores populares movilizados–, la Guerra del Agua se constituyó como una de las luchas antineoliberales más potentes registradas en el país y que se convirtió en un referente no solo en Bolivia, sino también a nivel internacional.

Años más tarde, en enero de 2007 –el segundo episodio analizado en este capítulo–, Cochabamba se convertiría en el escenario de un enfrentamiento ignominioso entre sectores sociales urbanos de clase media y alta, por un lado, y campesinos y urbano populares, por otro. El resultado fueron cuatro muertos y decenas de heridos. Esta confrontación violenta fue motivada por la disputa que se instaló entre el gobierno central dirigido por el MAS y el prefecto de Cochabamba, que representaba a las élites regionales o lo que en ese entonces se denominaba como la “vieja derecha”.

En 2019, luego de las elecciones presidenciales –el tercer momento–, se desató un conjunto de protestas alegando fraude en dichos comicios. En la ciudad de Cochabamba este conflicto recrearía la dinámica de confrontación, no solo con la participación de las fuerzas represivas del estado, sino al interior de la sociedad civil: clases medias y altas se parcializarían en contra de los indicios de un fraude electoral, mientras que sectores rurales –cocaleros y campesinos– y, posteriormente, sectores populares urbanos tomarían posición por el partido de gobierno. El resultado fueron varios enfrentamientos a lo largo de dos semanas, con cientos de personas heridas y más de una decena de fallecidos. Junto a ello se reinstalaron heridas históricas que actualizaron el clima de tensión y confrontación al interior de la sociedad cochabambina.

A partir de la historia de fragmentación de Cochabamba es posible intuir de dónde viene su dinámica conflictiva. La movilización es un lenguaje cotidiano en las relaciones sociales y en el vínculo gestado con el estado. Pero a raíz de estos tres momentos tan anómalos surgen otras preguntas: *¿Qué diferencia existe entre lo que sucedió en la Guerra del Agua y aquellos momentos en los que se confrontó la sociedad civil de manera directa?, ¿Qué*

rol juega la estatalidad –o la dinámica estadocéntrica, para ser más precisos– en aquello que organiza la conflictividad en cada uno de estos momentos?, y ¿cómo entender la fragmentación de la sociedad cochabambina en el marco de estos conflictos?

En este capítulo veremos que para comprender con mayor claridad las diferencias entre estos episodios –y, de alguna manera, de la conflictividad nacional–, es muy útil entender que algunos de estos escenarios conflictivos se configuraron en torno al cuidado de la vida, mientras que otros son simplemente derivados de disputas por el control del estado. Esta diferencia sobre el sentido que organiza la naturaleza del conflicto es fundamental para aprender de lo que sucedió en Cochabamba, de la misma manera, también sirve para nutrir horizontes de transformación que han quedado encapsulados en lógicas estadocéntricas.

La Guerra del Agua: poner la vida en el centro

La Guerra del Agua fue una de las experiencias más emblemáticas de lucha popular boliviana contra los procesos de despojo impulsados por las políticas neoliberales durante los últimos años del siglo XX.

En septiembre de 1999, el entonces presidente boliviano, Hugo Banzer Suárez, firmó el contrato de concesión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) a favor del consorcio Aguas del Tunari, una sociedad internacional a la cabeza de International Water Limited con sede en Londres y que, a su vez, era propiedad de la italiana Edision y la norteamericana Bechtel, una de las empresas constructoras más grande del mundo y que quedaría en el centro de este conflicto. El argumento del gobierno de aquel entonces –sostenido en el clásico fundamentalismo neoliberal–, señalaba

que las empresas de agua en el país eran ineficientes y que era menester su privatización para subsanar los problemas clásicos de las instituciones públicas.

Este proceso de privatización del agua se dio a la par de la preparación y promulgación de la Ley 2029, más conocida como la Ley de Aguas. Esta norma establecía criterios nacionales de funcionamiento para los sistemas de agua potable y alcantarillado, a la vez que legitimaba la privatización de toda gestión del agua en una determinada región, lo que determinaba que, incluso aquellos pozos u otras fuentes de agua que eran autogestionadas debían quedar controladas por las empresas privatizadoras (Gutiérrez, 2009; Kohl y Farthing, 2007).

De la noche a la mañana, las cooperativas independientes que proveen el agua al 25% de la población local perdieron su derecho a captar aguas subterráneas. Se esperaba que los campesinos, quienes controlaban tradicionalmente sus propios usos del agua, entraran en acuerdos con Aguas del Tunari. Como se lamentaba una mujer de Cochabamba: “Si Dios nos dio el agua ningún ser humano nos la debiera quitar” (Kohl y Farthing, 2007).

La privatización implicó, además, un drástico incremento del precio del agua, pese al mal servicio y a las pocas horas que la ciudadanía tenía de acceso a este recurso. En diciembre de 1999 las familias de sectores populares vieron incrementar los cobros por este servicio hasta en un 200%. Esta sería la gota que colmaría el vaso y desde enero del año 2000 la movilización social se opondría rotundamente a dicho proceso de privatización.

Entre el 10 y el 14 de enero de ese año, la convocatoria a un bloqueo de caminos abrió la puerta para la negociación con el gobierno. Entre el 4 y 5 de febrero, ante el incumplimiento gubernamental de los acuerdos y con el ánimo de sellar una

alianza urbano-rural para la lucha, se convocó a la “Toma de Cochabamba”. Finalmente, la denominada “Batalla Final”, que tuvo lugar entre el 4 y 10 de abril, culminó –luego de una brutal represión con el saldo de una persona muerta y más de treinta heridos– con la expulsión de la transnacional.

¿Cómo se configuró el conflicto?

La lucha que se produjo contra la privatización del agua en Cochabamba no emergió de una estructura partidaria o caudillista que hubiese asumido la *vanguardia* de dicha movilización. En todo caso, fue la confluencia de voces diversas y múltiples organizaciones de la sociedad civil las que se articularían en torno al cuidado del agua y que darían forma a la reconocida Coordinadora en Defensa de la Vida y el Agua.

Resulta entonces que, desde su nacimiento, la coordinadora se construye como un espacio de encuentro entre distintos que, a partir de ciertas decisiones gubernamentales, quedan colocados en la posición de estar obligados a superar *una necesidad común*: la defensa del agua. Cada una de las partes involucradas sufre la agresión de manera distinta y, por tanto, vive y entiende la amenaza de la Ley 2029 y la concesión del control y la distribución del agua potable de una forma específica. Sin embargo, a través de la fundación de la Coordinadora, como espacio de deliberación por excelencia, se logra comprender en común, en primer lugar, la específica manera en la que a cada sector afecta lo que el gobierno está imponiendo, y, en segundo lugar, que cada una de estas formas de sufrir la imposición estatal no es sino la manifestación específica de la agresión general hacia todos en conjunto, hacia la sociedad llana en pleno”. A partir de ese “acuerdo fundacional”, poco a poco se va hilvanando una manera de superar *también en conjunto*, la agresión planteada. Esta será la más importante experiencia de la Coordinadora, aportada al acervo de la lucha boliviana reciente (Gutiérrez, 2009).

Los principales actores dentro de la Coordinadora fueron aquellos directamente vinculados con la problemática. En primer lugar, la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones Regantes (FEDECOR), que no es otra cosa que la confluencia de distintas organizaciones campesinas que, preocupadas por el agua para riego, gestionan hasta el presente distintas fuentes de agua, además de articular un conjunto de demandas para el beneficio de los regantes en las cuatro regiones de los valles interandinos de Cochabamba –Valle Alto, Valle Bajo, Valle Central y Cono Sur–. La Ley 2029 afectaba directamente a este sector, acostumbrado a gestionar a través de complejos mecanismos de “usos y costumbres” distintas fuentes de agua y medios de distribución, como pozos, manantiales, acequias. Gestión que durante siglos fue en gran medida autogestiva, sin apoyo ni control de las instituciones estatales. Era evidente que el intento por imponer un control del agua desde una lógica empresarial y, sobre todo, cobrar por ella, derivaría en un conflicto.

Otro actor importante fue la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles.

Si los regantes constituyeron la fuerza principal de la Coordinadora en términos de organización, capacidad de movilización y conocimiento de la problemática del agua, Oscar Olivera, y la Federación de Fabriles –los fabriles–, aportaron sus recursos, sus vínculos con la prensa y con medios intelectuales, su capacidad de presentar los problemas de manera pública y su amplia autoridad moral (Gutiérrez, 2009).

Los fabriles, además canalizarían gran parte del descontento urbano que surgió por las consecuencias de la privatización del agua. La mayor parte de los barrios populares de Cochabamba no contaban con agua potable, por lo que muchos de ellos se organizaban en cooperativas para una gestión colectiva, ya sea

perforando pozos o comprando de manera conjunta cisternas de agua⁴. Con todo, estas organizaciones que también se vieron afectadas por el ingreso de Aguas del Tunari, la Ley 2029 y, en especial, por el incremento tarifario, reconocerían en la legitimidad de los Fabriles un lugar para depositar su energía de lucha.

Con la participación de la FEDECOR y de los fabriles, organizaciones que en aquel entonces contaban con mucha legitimidad popular, se pudo convocar a sectores rurales que, aunque no necesariamente se veían afectados de manera directa por la Ley 2029, se encontraban también en largos procesos de lucha frente a las políticas neoliberales, como fue el sector campesino y los productores de coca. La movilización de ambos sectores y el traslado de grandes contingentes de personas hacia la ciudad de Cochabamba, serían fundamentales para acrecentar la presión sobre el gobierno.

Por otro lado, otro actor de relevancia al interior de la coordinadora fue un conjunto de comités de defensa ambiental y los colegios profesionales, que en este caso particular produjeron un discurso técnico e información útil para la comprensión especializada, tanto económica, jurídica y ambiental, del proceso de privatización del agua en Cochabamba y sobre las distintas alternativas. La información producida por ellos fue clave para que se sumaran a la lucha sectores de capas medias de la sociedad cochabambina.

Así, la Coordinadora devino en una instancia compleja, a veces inestable, pero muy potente donde se tomaban decisiones importantes para articular la lucha. De la misma manera se constituyó como un espacio impensable sin la fuerza de las organizaciones de base, en las cuales se tomaban las decisiones

⁴ Para profundizar sobre la manera en que se gestionaban colectivamente las cooperativas de agua en la ciudad de Cochabamba, y cómo esa fuerza social se trasladó hacia la lucha que dio forma a la Guerra del Agua, sugiero consultar el trabajo de Lucía Linsalata (2015): *Cuando manda la asamblea*.

locales de cómo adherirse voluntariamente a esa instancia organizativa. Cuando la lucha se retraía, la Coordinadora perdía fuerza, pero cuando su lucha se expandía se convertía en el núcleo articulador de las demandas populares.

Lo llamativo es cómo esta instancia que no tenía ningún tipo de “legalidad” –en términos jurídico-estatales– en aquel momento fue reconocida por el estado como interlocutora ante el conjunto de movilizaciones que se llevaban a cabo en Cochabamba. Pero, al mismo tiempo, era una instancia cuya legitimidad popular –que a su vez fue capaz de articular ese fragmentado escenario cochabambino– se vio condicionada por la transparencia de sus acciones. En buena medida nunca dejó de operar desde los márgenes, desde una *politicidad* por fuera del estado, aunque en disputa con este. Ello le permitió movilizar a varios sectores, incluidos aquellos que no estaban directamente afectados por la política de privatización, como las federaciones cocaleras, que se solidarizaron con la lucha de la ciudad de Cochabamba.

La lucha por el agua, más que una lucha por el derecho al agua, por la recuperación de un recurso natural, porque el agua no se vuelve una mercancía, más que haber expulsado a una transnacional, yo pienso que la lucha por el agua va más allá y señala claramente que la gente quiere construir un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva democracia, una nueva economía. Yo creo que ante todo tiene un profundo contenido político, porque con la lucha de agua la gente recuperó también su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de proponer, su capacidad de que sean escuchados por los poderosos. Entrevista a Oscar Olivera, mayo 2005, en (Kruyt, 2006).

Así, pues:

La Coordinadora inauguró un modo distinto de “hacer política”, es decir, abrió un horizonte de sentido –territorialmente

situado, temporalmente pautado–, que permitió a las personas “hacer política de manera directa” sin colapsar en el campo gravitacional del Estado (Gutiérrez, 2009).

El agua como sustento de la vida y productor de socialidad

La Guerra del agua fue una gran victoria popular, con capacidad de generar una importante articulación en torno a una reivindicación centrada en el cuidado y reproducción de la vida, que en aquel momento inspiró a movimientos sociales conectados a nivel mundial a creer en ese “otro mundo posible”. Y de manera paralela, se convirtió en un momento que inauguró un ciclo de luchas a nivel nacional, las cuales asumieron una forma particular, desde los márgenes y rebasando los estrechos canales de organización social habilitados por el estado.

Es importante comprender la particularidad que da sentido a este conflicto social. La Guerra del Agua se produjo en torno a una lucha directa por un recurso relacionado con el cuidado de la vida, que fue expropiado por el capital a través de la mediación estatal. *No fue una lucha por el poder estatal.*

En todo caso, la potencia de aquel momento se sostiene en que la capacidad organizativa nunca quedó capturada por la dinámica estatal –ni en su versión gubernamental ni partidaria–. Por tanto, cuando finalmente se logró expulsar a la transnacional y rescindir los contratos de privatización, la fuerza de dicha movilización se disipó y –a no ser algunos intentos marginales– tampoco se convirtió en una organización partidaria ni se convirtió en una propuesta estatal. La Guerra del Agua, en este sentido, fue una lucha no estadocéntrica que contrastará con la forma de los posteriores conflictos sociales de 2007 y de 2019.

Enero de 2007 y la crisis política de 2019: el estado en el centro

Lo que tienen en común la Guerra del Agua, Enero Negro y la crisis política de 2019 en Cochabamba, es una gran escalada de la conflictividad social que termina implicando a distintos sectores de la sociedad. Son conflictos que se superponen a un fragmentado escenario social con asidero histórico de largo aliento y que termina por convertirse en una caja de resonancia que magnifica dichos conflictos. Así pues, Cochabamba, por su propia historia, es una sociedad reincidente en la configuración de grandes conflictos como medio cotidiano para canalizar demandas y reivindicaciones.

Pero las semejanzas no van muchos más allá, a diferencia de la Guerra del Agua, los otros dos momentos conflictivos –2007 y 2019– se presentaron como un conjunto de confrontaciones al interior de la sociedad civil, que hicieron eco del antagonismo resultado de múltiples desigualdades e injusticias sociales, pero que serían instrumentalizados por las disputas partidarias en aras de lograr el control del poder estatal.

El enfrentamiento en Enero Negro (2007)

El 11 de enero de 2007 –a un año de que Evo Morales llegara a la presidencia–, un brutal enfrentamiento cimbró la cotidianidad Cochabambina. Las imágenes que quedaron registradas de la confrontación no dejan de ser estremecedoras luego de una década y media. Muchos jóvenes, principalmente de estratos medios y altos, armados con palos y bates de beisbol, fueron convocados por la gobernación y aparecieron amenazantes, esgrimiendo consignas racistas frente a una movilización campesina. En las siguientes imágenes estos mismos jóvenes aparecen golpeando a esos campesinos –principalmente mujeres y ancianos–. Luego nos enteraríamos de que las agresiones contra

los campesinos incluyeron armas de fuego. El resultado fueron decenas de heridos y cuatro muertos: tres personas provenientes del campo y un joven de la ciudad. Cochabamba quedaría profundamente dividida luego de este incidente.

¿Qué produjo el conflicto?

Para entender este Enero Negro –como se le llamó a este momento tan desgarrador de la historia Cochabambina–, es importante dilucidar el contexto político que vivía el país en ese entonces. En agosto de 2006 se inició la Asamblea Constituyente, una reivindicación central que fue posible gracias al conjunto de luchas sociales que se sucedieron entre 2000 y 2005 –a partir de la Guerra del Agua– y que culminaron en la victoria electoral del MAS, liderado por el dirigente cocalero Evo Morales. Este proceso constituyente, sin embargo, fue desde su misma convocatoria un proceso de disputas. Por un lado, estaban las organizaciones sociales, principalmente rurales, que tenían como eje articulador al Pacto de Unidad,⁵ por otro lado se encontraba la derecha tradicional del país, sus partidos políticos y sus organizaciones civiles. Y en el medio de esta disputa estaba el gobierno del MAS, que, aunque tenía gran parte de su agenda marcada por el Pacto de Unidad, buscaba lograr una autonomía política que le permitiese resguardar su propio interés partidario y la posibilidad de mantenerse en el gobierno a partir de negociaciones con todos los actores implicados (Salazar, 2015).

Ni bien comenzó la Asamblea Constituyente, se vio estancada durante varios meses debido a la discusión en torno al Reglamento de Debates. La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente establecía que el nuevo texto constitucional debía

⁵ El Pacto de Unidad surge oficialmente en 2004 como una supraorganización indígena originaria campesina que articuló a la CSUTCB, FNMCB-BS, CIDOB y CSCB, y posteriormente se articularía el CONAMAQ. Esta organización emerge como una forma de organización para impulsar un proceso constituyente.

ser aprobado por dos tercios de la votación, sin embargo, en la ley no se establecía si es que los dos tercios serían necesarios en todo el proceso constituyente o solo en el momento de aprobar el documento final. Los asambleístas del MAS –muchos representantes del Pacto de Unidad– trataron de lograr que todo artículo fuese aprobado por mayoría absoluta y los partidos de la derecha tradicional intentaron impulsar los dos tercios en todo el proceso. Esta pulseta habría de durar casi siete meses, en los cuales no se trabajó ningún aspecto de la nueva constitución. Finalmente, y pese a la oposición de distintas organizaciones sociales –incluso de la CSUTCB–, el MAS aceptaría la propuesta de los dos tercios en febrero de 2007 (Schavelzon, 2012).

Junto al tema de los dos tercios, la derecha también azuzó el tema referido al de la capitalidad, ¿La Paz o Sucre?, mismo que terminaría generando mucha más tensión en el proceso constituyente. En medio de este conflicto, las élites de Santa Cruz, Beni y Pando, con el apoyo de algunos sectores de Tarija, comenzaron a exacerbar el discurso autonomista que daría forma a la noción de la “Media Luna” –aquellas regiones que se mostraban contrarias al “Proceso de cambio” y que buscaban legislaciones autónomas, no derivadas de la Carta Magna que se debatía en la constituyente–.

En Cochabamba se sintetizarían muchas de estas contradicciones. Las élites de la ciudad, a la cabeza del entonces prefecto, Manfred Reyes Villa –un representante de la vieja clase política neoliberal, quien mantenía una alianza con los sectores más conservadores de la sociedad boliviana–, intentaron promover el imaginario de que Cochabamba también buscaba ser autónoma, pese a que meses antes, en el referéndum autonómico, la opción por

la autonomía perdió contundentemente en el departamento de Cochabamba⁶.

En respuesta a ello, sectores campesinos, indígenas y un importante contingente de productores de coca del departamento de Cochabamba, en coordinación con el partido de gobierno, se movilizaron hacia la capital del departamento, pidiendo que la prefectura retire su solicitud de referéndum, así como la renuncia del prefecto⁷. Ante esta situación, la prefectura movilizó distintos grupos de choque, como la denominada Juventud por la Democracia y, a su vez, incitaron a las clases medias a salir a “defender la ciudad de campesinos e indígenas que habían llegado del campo”, utilizando para ello los imaginarios coloniales y racistas que establecen una geografía política de la ciudad de Cochabamba, en la que el norte de la urbe, separada por el Río Rocha, así como parte del centro de la ciudad, son considerados espacios bajo el control de las élites regionales y de las clases medias.

El día 11 de enero de 2007, cuando la mayor parte de la movilización campesina se encontraba en la Plaza 14 de Septiembre –en pleno centro de la ciudad–, algunas mujeres y ancianos se quedaron a descansar y a hacer vigilia cerca de la avenida El Prado. Sin embargo, al otro lado del puente –en el norte– los grupos de “jóvenes por la democracia” comenzaron a instigar a un puñado de policías que supuestamente se encargaban de separar a ambos grupos. Cuando los policías fueron rebasados, grupos de choque comenzaron a golpear a toda persona que pudiese haber sido

6 Durante el gobierno de Rodríguez Veltzé se aprobó la Ley que establecía que el 2 de julio de 2006, a la par de la elección de representantes para la Asamblea Constituyente, se llevaría a cabo un Referéndum Autonómico en el que cada uno de los nueve departamentos decidiría sobre su autonomía. Este referéndum tendría carácter vinculante en el proceso constituyente (OEP y PNUD, 2012).

7 Para comprender más a detalle las varias demandas que movilizaron a los sectores rurales y urbano-populares en enero de 2007 se puede consultar el texto de Somos Sur “¿Cómo entender los conflictos del 11 de enero?”. <http://www.somossur.net/documentos/Como_entender_los_conflictos_del_11_de_enero.pdf>.

identificada como “del otro bando”, es decir, la agresión operó contra un estereotipo que incluía el color de piel, vestimenta y estrato social. Pronto, los marchistas que estaban en la Plaza 14 de Septiembre se dirigieron al Prado para apoyar a su gente y el enfrentamiento escaló de manera exponencial. Horas más tarde, el ejército retomó el control de la ciudad. Fallecieron tres personas ese día –otra moriría días después en el hospital, como consecuencia de las heridas–.

Desde la noche de ese 11 de enero, los sectores populares urbanos se plegarían en apoyo a la movilización campesina y en conjunto demandarían la renuncia del prefecto⁸.

Nunca se supo el motivo por el cual hubo tan pocos policías destinados a separar ambas movilizaciones, pese a que desde un principio era evidente el desastre que este enfrentamiento podía significar. Pero lo cierto es que después del conflicto, tanto gobierno como prefectura pactarían acuerdos que iban más allá de lo que ese día se puso en juego en la movilización. Pese al descontento y a la negativa popular, el gobierno otorgó garantías al prefecto de Cochabamba para retomar sus actividades,⁹ bajando de tono en su ofensiva contra el gobierno, mientras que las dirigencias campesinas recibieron la instructiva de replegarse.

Las heridas de ese fatídico enero están aún presentes en Cochabamba. Este conflicto puede ser entendido desde varias capas: el racismo latente de las élites criollas que trasmina los imaginarios de muchos sectores urbanos, la movilización legítima

⁸ En un comunicado de prensa, con más de cuarenta organizaciones firmantes se expresaba que Reyes Villa debía renunciar por: 1) traicionar el mandato popular en el Referéndum autonómico, 2) por haber contratado matones de la Unión Juvenil Cruceñista para masacrar a trabajadores, universitarios y humildes campesinos, 3) por las denuncias de corrupción en su contra, 4) por engañar al pueblo cochabambino con la ejecución presupuestaria, 2) por haber incitado a la violencia y división de los cochabambinos (Los Tiempos, 14 de enero de 2007).

⁹ “El vicepresidente reitera las garantías personales y constitucionales para que Manfred Reyes Villa vuelva a Cochabamba” alegaba el subtítulo de un periódico de esos días (Opinión, 17 de enero de 2007).

de sectores populares o las demandas y reivindicaciones que fueron capturadas y neutralizadas desde una estrategia de poder que utilizó su fuerza y la convirtió en moneda de cambio para negociar entre esas mismas élites.

Este hecho tuvo implicaciones importantes en las disputas que en ese momento se estaban dando a nivel estatal, pero de ninguna manera surgió ni fue controlado por los sectores populares de Cochabamba –que incluso habían designado a su propio gobernador interino–, tampoco este conflicto sirvió para resolver problemas concretos de la población.

Este mecanismo de control y utilización de la fuerza popular organizada para alcanzar fines político-partidarios del gobierno se convirtió, con el tiempo, en una cuestión recurrente durante el gobierno del MAS, lo que terminó debilitando a las tramas organizativas populares y a sus luchas.

2007-2019: la desconfiguración del tejido social boliviano

Los enfrentamientos violentos de 2007 en Cochabamba y en Santa Cruz, y 2008 en Pando, estuvieron signados por la pugna entre la tradicional élite política y económica del país y el nuevo poder político que se configuró en torno al MAS. Este periodo de confrontación culminó cuando se pactó la nueva Constitución Política del Estado, que luego de un proceso de amplio debate en la Asamblea Constituyente, terminaría por ser negociada entre partidos políticos, resultando en la modificación de más de 100 artículos para contentar a las fuerzas opositoras (Kruyt, 2021; Salazar, 2020).

Vale la pena mencionar que, en aquel último esfuerzo conjunto entre las elites reaccionarias del país, las clases altas de Cochabamba jugaron un rol marginal. Fueron los departamentos

de la “Media Luna” –Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando–, liderados por el comité cívico cruceño quienes utilizaban la bandera de la autonomía departamental –e incluso la del federalismo e independencia– para legitimar su oposición a las amenazas de un gobierno con discurso socialista e indigenista. Si bien aquellos departamentos históricamente habían sido afectados por su ubicación periférica con relación al centro del poder político en La Paz, para Cochabamba ese no fue el caso. La bandera de la autonomía resultó difícil de utilizar por la elite cochabambina, ya que su aspiración política siempre fue nacional-estatista.

La aprobación de la nueva Constitución inició un nuevo periodo político que estuvo marcado, por un lado, por la hegemonía partidaria contundente del MAS y, por el otro, por la intensificación del pacto del gobierno nacional con el poder económico, principalmente organizado en y alrededor de los núcleos del agronegocio en el oriente, específicamente el sector sojero y ganadero, que presionaron constantemente por la ampliación de sus privilegios. A la vez, se consolidó un aparato partidario clientelar entre el MAS y otros sectores que incursionaban en actividades capitalistas muy rentables como los cooperativistas mineros, los cocaleros y los transportistas. La política económica se consolidó con base en la extracción de materias primas, como el gas, el petróleo, los minerales, la coca y la soya, las cuales justamente en esa época se exportaron con precios relativamente favorables, resultando en sustanciosos flujos de ingresos para el Estado Nacional. Los pocos actores que se opusieron a los efectos sociales y ambientales de este modelo fueron descalificados como “opositores al desarrollo” (Tapia y Chávez, 2020).

En otras palabras, se instaló un modelo económico sostenido en el capitalismo extractivo y, a la vez, un modelo político

fundamentalmente patriarcal en sus prácticas jerárquicas y clientelares.

Para los movimientos sociales del país, este periodo generó cambios profundos en muchas dimensiones. Para comprender algunos de estos procesos, es importante remarcar que el periodo previo de pugna violenta, donde los antiguos “dueños del país” mostraron su cara más violenta y racista, generó una identificación profunda en los sectores populares –campesinos, obreros, indígenas, etc.– con la defensa del “proceso de cambio” representado por el gobierno del MAS y, en particular, por la figura de Evo Morales. Incluso cuando como gobernantes empezaron a pactar la política con las élites tradicionales, en su condición de dirigentes políticos, los líderes del MAS continuaron utilizando hábilmente el antagonismo para seguir consolidando el estado de alerta en torno a “la amenaza de la derecha”. Esta constante provocación del miedo, sobre todo en los sectores más vulnerables, y el sentido de pertenencia en torno al enemigo común, resultó ser una estrategia efectiva que distraía la atención de las políticas económicas, las que fueron implementadas sin mucha participación ni resistencia desde las bases populares del MAS.

Fue bajo estas condiciones que se instalaron las siguientes tres dinámicas en las organizaciones sociales:

Primero, fue muy llamativa la cooptación tanto de estructuras y organizaciones como de agendas. Tanto las tres principales confederaciones, organizaciones sindicales campesinas del país –CSTUCB, Bartolinas Sisas y los interculturales, antes denominados colonizadores– como el sector cocalero del Chapare reunido en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba –articulación que mantuvo a Evo Morales en el cargo de presidente sindical, durante todo el tiempo que él fungía de presidente de

Bolivia– se alinearon al MAS, identificado por estos sectores como el instrumento político que respondería a sus mandatos orgánicos. En realidad, su lealtad electoral fue recompensada con múltiples cargos legislativos y ejecutivos en los diferentes gobiernos del MAS, pero es más difícil identificar las políticas públicas que fueron impulsadas por y para estos sectores en este tiempo. Un ejemplo de esto es la política agraria, que en vez de ser construida desde el sector campesino ha sido determinada cada vez más por los intereses del agroempresariado del oriente del país.

En segundo lugar, muchas organizaciones sociales vivieron procesos de fragmentación y polarización en este periodo. En particular en las organizaciones en las que ciertos líderes expresaron voces críticas al gobierno del MAS, aparecieron estructuras paralelas con vínculos directos con las esferas gubernamentales. Para esta división interactuaron factores internos, que justamente tenían que ver con el debilitamiento de agendas propias, con factores más externos como la intromisión intencional de partidos políticos. Así, se debilitaron no solo organizaciones indígenas nacionales como la CONAMAQ y CIDOB, también organizaciones urbanas como la FEJUVE de El Alto u organizaciones departamentales como la FEDECOR, en el caso de Cochabamba.

En tercer lugar, gradualmente iba aumentando en las organizaciones la crítica a las intenciones de Evo Morales de permanecer en el poder después del mandato constitucional, y a la vez se generó un descontento dentro del partido en cuanto a las prácticas autoritarias para la selección de candidatos o candidatas para las elecciones, especialmente en el periodo entre 2016 y 2019. La reacción de la cúpula del MAS fue instalar una división cada vez más marcada entre los que estaban “con Evo” y

los que no, estos últimos fueron catalogados como “de derecha”. En un intento de opacar la compleja diversidad de intereses en el país, pero también dentro del MAS, se generó una campaña con la bandera “Evo es Pueblo”, instalando la convicción de que todos aquellos que criticaban a Evo se ubicarían en contra del pueblo. Esta polarización anuló cada vez más las opciones de las organizaciones sociales y su capacidad de generar procesos de incidencia y movilización sobre cualquier tema de fondo.

En nuestro sindicato, los pequeños que estamos aquí abajo, las reuniones han sido normales, han sido con regularidad, hemos avanzado con regularidad. El problema ha sido en niveles superiores y ahora, qué pasa, como están polarizados nosotros no podemos tener esa conexión con cualquiera. No podemos. [...] Entonces nos desorganiza. [...] En los Congresos hay alguien que ya lo digita de arriba y como ya no va la gente, solo van los representantes. Eso ha logrado que más lo polaricen, la gente ya no puede opinar, ya no podemos opinar. (Entrevista con dirigente sindical del Valle Alto de Cochabamba, 2022)

En resumen, en este periodo se evidenció una reversión de varias tendencias que habían caracterizado el periodo de movilización popular anterior a la subida al poder del MAS. Las prácticas basadas en la autogestión y horizontalidad que caracterizaban las luchas sociales de 2000 a 2005, las que posibilitaban un periodo de reconstitución del poder desde abajo, fueron reemplazadas por estructuras verticales y poco transparentes, ya bastante conocidas en la historia política boliviana –y continental– del siglo XX. La consolidación de la estructura dirigencial partidaria-sindical organizada en torno al acceso a beneficios que variaban desde cargos, hasta tierras y servicios sexuales, no solo significó un despojo de un imaginario político alternativo –el sueño del “otro mundo es posible” de los años 2000–, sino también resultó ser una repatriarcalización del espacio de la organización social.

La consecuencia de este debilitamiento de las posibilidades contestatarias fue que las voces críticas, en diferentes lugares del escenario político boliviano, quedaron silenciadas o solamente encontraron un canal de expresión a través de agrupaciones de ciudadanos con poca agenda política, que no iba más allá del discurso de la recuperación de la democracia, agenda que muchas veces quedó capturada por los discursos de la derecha tradicional. Esta situación resultó ser un factor clave en los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019.

Cochabamba en la crisis política poselectoral de 2019

Luego de las elecciones generales de 2019, en las que se tenía que elegir un nuevo presidente, Bolivia ingresó a una crisis política sin precedentes en su historia reciente, la cual derivaría en un conjunto de hechos violentos y masacres, cientos de heridos y un proceso de descomposición política que quedaría expresada en una polarización acentuada, que marcará la agenda política estatal hasta nuestros días.

En ese contexto, Cochabamba se convirtió, literalmente, en un campo de batalla. Se produjo una escalada de violencia que dividió y confrontó a distintos sectores sociales durante varias semanas. Centenares de personas se desplazaban en motocicletas por la ciudad con palos y armas blancas, discursos racistas, amenazas de muerte, incendios de propiedades, mientras que organizaciones barriales construían barricadas para resistir las posibles agresiones de sus adversarios. Es decir, un clima beligerante que actualizó y profundizó las grietas que se generaron en 2007, aunque esta vez terminarían siendo todavía mucho más funcionales a una reyerta por el poder estatal.

¿De dónde surge el conflicto?

Hay varios elementos para abordar este conflicto, pero uno de los más evidentes es que el que nos remite a febrero de 2016, cuando el gobierno boliviano convocó a un referéndum para modificar la reciente Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo que limita la reelección presidencial a una sola vez, para permitir la posibilidad de una reelección indefinida. Luego de unos reñidos comicios, la opción por la no modificación constitucional ganó con el 51,3% de los votos válidos, lo que aparentemente imposibilitaba a Evo Morales a postularse en las elecciones de 2019. Sin embargo, en un acto desesperado, el gobierno –luego de fuertes presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional, que incluyeron persecuciones, criminalización de magistrados y destituciones arbitrarias–, logró que el Tribunal Constitucional, sobrepasando la propia CPE, habilitara la reelección de Morales y de su vicepresidente, con el rebuscado argumento de que una reelección indefinida estaría amparada en la Convención Americana o Pacto de San José –argumento que la Corte Interamericana desvirtuaría años después–.

Este hecho arbitrario, que desconoció un “plebiscito de soberanía popular”, indignó a gran parte de la sociedad, incluidos varios simpatizantes del partido de gobierno. Sin embargo, el MAS acusó de ser de “derecha” a quien criticase este acto de autoritarismo, recreando con ello el escenario polarizado.

Ahora bien, las denominadas “plataformas ciudadanas” –una estrategia de la élite del país para controlar y movilizar el descontento de distintos segmentos de la sociedad, en especial de las capas medias– comenzaron a crecer bajo un esquema que también promovía la polarización, muchas veces con discursos racistas y de confrontación. Así se invisibilizó el malestar de

organizaciones sociales y de algunos segmentos de la población que cuestionaron el actuar del partido de gobierno pero que, al mismo tiempo se resistían a quedar insertas en las denominadas “plataformas ciudadanas”.

Este escenario de confrontación fue en aumento en los siguientes años, hasta las elecciones del 20 de octubre de 2019. En los meses previos a los comicios se presentaron muchas irregularidades: despidos y renunciaciones en el Órgano Electoral Plurinacional, organización de unas primarias que no estaban contempladas previamente, opacidad en el proceso de organización de las elecciones, etc. Todo ello generó un contexto de desconfianza profunda en la institucionalidad estatal y sospechas de un posible fraude electoral (Puente, 2019).

Es en ese contexto que, cuando en la noche de las elecciones se paralizó el conteo preliminar que fue difundida por la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se desató la violencia.¹⁰ Después de varios días de incertidumbre, el resultado final mostró una tendencia distinta a la que mostraba el TREP antes de su detención, posicionando a Evo Morales con más de 47% de los votos y marcando, así, una diferencia de más de 10 puntos porcentuales respecto a su oponente Carlos de Mesa, evitando así una segunda vuelta. Desde ese momento el país se sumergió en la profunda crisis política que terminaría con la renuncia de Morales, daría lugar a la presidencia de Añez en medio de mucha violencia y represión y, un año después, permitiría la llegada al poder del que fue ministro de Economía y Finanzas Públicas de Evo Morales, el actual presidente, Luis Arce Catacora.

¹⁰ Luego, en los informes solicitados por el mismo gobierno de Bolivia a la OEA y a la Comunidad Europea, se conocería que, además, en ese momento un servidor no autorizado se conectó al sistema de gestión y control de las elecciones.

Cada región del país vivió el conflicto de manera distinta, marcándose diferencias profundas entre las tres regiones del eje central del país, diferencias que se habían ido configurando por factores partidarios y regionalistas a la vez. En el caso de Cochabamba, los indicios de irregularidades en el proceso electoral activaron de manera inmediata a las plataformas ciudadanas, las cuales convocaron a la ciudadanía a movilizarse en “defensa de la democracia”. En los siguientes días, las mismas tomarían distintas zonas de la ciudad con bloqueos y movilizaciones –en especial en la zona central y norte–, intentando monopolizar el malestar derivado de las elecciones. En estos primeros momentos, la mayoría de los sectores populares del departamento se mantuvieron en silencio –con excepción de muy pocas, como el sindicalismo cocalero, que operando para el MAS, inmediatamente avaló la victoria de Morales–, expectantes del descompuesto clima electoral, y aunque algunos de estos sectores expresaron su malestar por las irregularidades en el proceso electoral, era impensable apoyar a las plataformas ciudadanas, que representaban a una forma política de la derecha tradicional del país.

En los siguientes días, estas plataformas y sus movilizaciones dieron lugar a grupos de choque que asumieron un rol parapolicial, como el de los denominados “Motoqueros”, que comenzaron a amenazar y a amedrentar a sectores populares, cometiendo actos violentos. Por otro lado, el Movimiento Al Socialismo ordenó a las dirigencias campesinas, cocaleras y de barrios populares urbanos a movilizarse para defender la elección. Si bien al principio estos llamados no tuvieron poder de convocatoria, el gran problema de la desinformación, así como el lenguaje racista violento que asumirían ciertos grupos de derecha, provocaron reacciones de indignación, generando una cada vez más estridente polarización que derivó en el escalamiento de la violencia de una manera inusitada.

También era evidente que para ese momento se habían erosionado –o simplemente no existían– distintos canales “democráticos” que permitiesen a otros sectores que eran críticos al MAS, pero a la vez sin afinidad con las formas políticas violentas de derecha, poder encontrar un lugar para expresar su inconformidad con lo que venía pasando, lo que consolidó la imposición de una política regida por la confrontación de dos polos.

La región del Chapare se convertiría en el bastión de la “resistencia” del partido de gobierno. Desde ahí también se demostró la intención de escalar la conflictividad social, haciendo gala de sus propios “motoqueros”, de su capacidad de movilización y de discursos de violencia y confrontación. Las imágenes de lo que aparentaban ser milicias armadas, el control total en la región por parte de las federaciones cocaleras, además de contar con sus propios medios de comunicación con gran capacidad de difusión, demostraban la fuerza que, en términos prácticos, tenía este sector.

El 27 de octubre de 2019, las imágenes de dos bandos de civiles movilizándose para el enfrentamiento directo estremecieron a la ciudad. Esta dinámica pronto terminó por acallar las voces más críticas y visibilizó a los “extremos”, aquellos que se beneficiaban de la violencia. Para el 6 de noviembre, cuatro días antes de la renuncia de Morales, Cochabamba volvió a ser sede de una de las más violentas confrontaciones entre sectores de la sociedad civil, en esa ocasión murió un joven que se oponía al gobierno de Morales. Ese fue el mismo día en que la alcaldesa de Vinto, militante del MAS, fue agredida por una turba enardecida. Aquellas imágenes darían la vuelta al mundo (Los Tiempos, 7 de noviembre de 2019).

El 12 de noviembre la senadora opositora Jeanine Añez asumió la presidencia de manera “transitoria”, en medio de un polémico vacío de poder, rodeada de militares y en un clima de gran violencia que acompañaría a dicho momento. Tres días después, Cochabamba

vivió la ignominiosa y brutal masacre de nueve productores de hoja de coca en la localidad de Sacaba, mismos que llegaban a la ciudad en protesta por el nuevo gobierno y demandando que Evo Morales retornase a la presidencia. Este brutal hecho sería utilizado políticamente, al igual que la masacre de Senkata (El Alto), cuatro días después, en el que fallecieron 10 personas.

Así, Cochabamba se convirtió, nuevamente, en un campo de batalla que sintetizaba la disputa nacional por el poder, esta vez con un mayor grado de violencia y por un lapso mayor de tiempo que en 2007. La configuración de actores civiles organizados específicamente para la confrontación y la consumación de un conjunto de escaramuzas con un elevado costo humano, que a su vez fueron instrumentalizados por proyectos políticos partidarios, son elementos que generan gran preocupación y que dan cuenta del descompuesto escenario político.

Desarmando el conflicto estadocéntrico

En Enero Negro y en la crisis política de 2019 –en especial en esta última– lo que organizó y produjo el conflicto social fue la disputa por el control del estado a partir de un conjunto de clivajes históricos de desigualdad e injusticia social.

Si bien en enero de 2007 el malestar producido por la posición del prefecto cochabambino movilizó a la población de sectores populares, el mismo quedó rápidamente capturado por la estrategia política del gobierno, mientras que, desde el otro lado, se puso en evidencia los imaginarios más conservadores y racistas de las capas media y altas de la sociedad cochabambina. A diferencia de 2007, en octubre de 2019 el conflicto tuvo una impronta estatal mucho más evidente. Una movilización generalizada y sostenida de la sociedad cochabambina en torno a la reyerta que grupos políticos mantuvieron por el poder. En realidad, el conflicto

en Cochabamba se convirtió en moneda de cambio de quienes gestionaban la disputa nacional, el Movimiento Al Socialismo, por un lado, y la derecha tradicional, por el otro, quedando relegados a un segundo plano los verdaderos malestares sociales que fueron acumulados por años. La *polarización social* es un mecanismo que sirve justamente para eso, para invisibilizar los problemas de fondo, posicionando otros que parecieran totalizar el escenario político.

Si bien en este texto no se profundiza al respecto, vale la pena señalar la importancia de la dimensión patriarcal que ha tenido esta dinámica polarizante¹¹. La escalada de la polarización asumió la clásica disputa de varones por el control del poder. Tanto Evo Morales como el líder cruceño Luis Fernando Camacho –quien en Santa Cruz orgullosamente llevaba el apodo de el “macho Camacho”– aplicaron un estilo de liderazgo caudillista, cultivando cada uno una narrativa que señalaba que, de ellos de manera personal, dependía el futuro del país. El viaje de Camacho de Santa Cruz a La Paz con la biblia en la mano fue un episodio bastante emblemático en ese sentido, así como lo fueron los “Motoqueros” que imponían un imaginario de autoridad parapolicial basado en una simbología patriarcal. De la misma manera operaron muchas de las muestras de fuerza realizadas por jóvenes del trópico cochabambino durante los bloqueos en la región del Chapare.

A través de un conjunto de herramientas de dominación masculina –generación de confusión, instauración del miedo y el silenciamiento–, que han sido abordadas con mucha claridad por el feminismo (Segato, 2003), diferentes actores en disputa intentaron totalizar e instrumentalizar el escenario político luego de la renuncia de Morales. Es por este motivo que, desde

¹¹ Agradecemos a Eliana Quiñones por hacer énfasis en esta temática cuando revisó nuestro documento. Aunque recuperamos varias de sus reflexiones para organizar este pequeño apartado, la responsabilidad de lo acá expuesto es enteramente nuestra.

los primeros días del conflicto, fueron las mujeres organizadas de manera autónoma –particularmente desde organizaciones y colectividades feministas–, las que visibilizaron y enunciaron con mayor claridad la dinámica que fue asumiendo esta crisis política, tanto en su dimensión patriarcal, pero también en el conjunto de violencias que derivaron de la misma.

Ante la espiral de violencia fueron los acuerpamientos entre mujeres los que con mayor determinación intentaron romper el binarismo masista-pitita. El denominado “Parlamento de las Mujeres”, impulsado inicialmente por Mujeres Creando de la ciudad de La Paz y que después se expandiría a otros departamentos del país, fue una de las experiencias más fértiles en este sentido. Al grito de “ni fascismo ni masismo, sus cúpulas de poder nos llevan al abismo”, estos espacios cuestionaron con mayor claridad el fondo del conflicto, trascendiendo la estéril mirada polarizante.

De la misma manera, es importante tener en cuenta que, en gran parte del área de tierras bajas del país, habitadas por pueblos indígenas, la movilización o interrupción de la vida cotidiana fue mínima durante la crisis política. En estas regiones marginales del poder político, los habitantes no se sintieron convocados, y con su silencio expresaron también una posición de rechazo a ambos “bandos” del conflicto.

Fueron estas voces diversas, acciones disidentes y silencios políticos –aquellos que no se pueden instrumentalizar fácilmente desde el poder–, los que apostaron por “desarmar la guerra gota por gota”, desde lugares no tradicionales de la política estadocéntrica, y son las que merecen mayor atención al momento de aprender de esta dolorosa experiencia.

Capítulo 3.

¿Qué agendas quedan invisibilizadas por la polarización?

Han pasado más de dos años desde aquel violento octubre-noviembre de 2019. En ese lapso tiempo se instaló un gobierno “transitorio” que tuvo a la represión, a las amenazas y a una impronta militar como principal mecanismo de ejercicio del poder, además de que estuvo plagado de casos de corrupción. A los pocos meses del conflicto, la pandemia del coronavirus llegaría al país, con ello la crisis política se agudizó y Bolivia se enfrascó en momentos de tensión pese a las medidas de cuarentena. Más adelante, en octubre de 2020, unos nuevos comicios llevaron a Luis Arce Catacora del MAS a la presidencia, lo que en ese momento pareció calmar las aguas luego de un ciclo de violencia e incertidumbre. Sin embargo, mantener ese estado de tensión política parece haberse convertido en una forma permanente de gestión del poder.

La polarización se recrea todos los días, manteniendo un clima latente de violencia –sin resolverlo–. Airados discursos, acusaciones y amenazas de uno y otro lado terminan por atestar el debate público, dando poca cabida a problemáticas centrales que afectan a la sociedad boliviana y, en particular, a sectores populares que se han visto fuertemente afectados por la crisis sanitaria y económica. Estos temas solo son recuperados en la esfera pública oficial en tanto puedan instrumentalizarse por alguno de los actores políticos. Las luchas territoriales,

como las indígenas, son el mejor ejemplo de ello: quien está en calidad de oposición intenta capturarlas para beneficio propio, mientras que cuando asume el poder las acusa de ser fuerzas “desestabilizadoras”. Pero ese no es el único caso.

Lo que nos interesa apuntar en este capítulo es el conjunto de agendas populares o micro luchas democratizantes que reproducen la vida por fuera –y a pesar– de la dinámica partidaria estatal, agendas que han quedado invisibilizadas o neutralizadas por este clima de confrontación polarizante que vive Bolivia. La relevancia de esta presentación tiene que ver no solo con las implicaciones directas que la marginación de estas temáticas tiene para un conjunto de sectores populares; sino también porque, como vimos con la Guerra del Agua, la exposición de estas agendas y la generación de organización en torno a las mismas genera dinámicas sociales y de lucha que abordan las determinantes más profundas del antagonismo social, así como un amplio espectro de desigualdades sociales con un entronque patriarcal, colonial y capitalista.

Poniendo la vida en el centro de los haceres y de las luchas

Para poner en evidencia algunas de las agendas populares que han quedado relegadas en la actual coyuntura política, a continuación se presentan algunas experiencias recuperadas de diálogos que el CEESP ha entablado con cinco organizaciones de base durante el 2021. A través de ellos se ha podido reconstruir un conjunto de problemáticas que viven estas organizaciones y que se han

visto acentuadas por el escenario de violencia y de crisis sanitaria que han tenido lugar en los últimos años.¹²

El elemento en común a estas cinco organizaciones de base es que se producen, se recrean y se sostienen en el tiempo porque su existencia permite al conjunto de personas que hacen parte de ella lograr gestionar y mejorar distintas cuestiones concretas relacionadas con su cotidianidad. En este sentido, entendemos que son organizaciones que –más allá de sus dificultades– aglutinan en su interior a un conjunto de personas, quienes de manera colectiva *se hacen cargo* de uno o varios aspectos relacionados con la reproducción y el cuidado de la vida.

Se ha trabajado con dos Organizaciones Territoriales de Base (OTB) pertenecientes al Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba, una zona en la que convergen barrios populares de la ciudad. Estas OTB, con el tiempo han llegado a ser organizaciones híbridas, que gestionan recursos provenientes de instituciones públicas y, a su vez, se reproducen a partir de procesos autogestionados de vecinos, cuyas actividades van más allá de lo que los recursos públicos permiten y se convierten en verdaderos micro gobiernos territoriales urbanos. Las OTB participantes fueron San Nicolás y Los Olivos.

También participó de este proyecto una asociación de trabajadoras dedicadas al cuidado de niños y niñas en centros infantiles comunitarios, dependientes del Municipio de Cochabamba. Estos centros se ubican en áreas estratégicas de la ciudad para apoyar

¹² Este diálogo con las cinco organizaciones se realizó a través de entrevistas en profundidad y talleres que fueron coordinados con las directivas de cada una de ellas. En este sentido –y pese a la pandemia–, se ha tratado de realizar por lo menos una de estas actividades de manera presencial. Como devolución, el CEESP ha realizado una cartilla en la que de manera breve se sistematizan y exponen la historia, problemas y horizontes de cada una de las organizaciones. Para más información revisar la cartilla: “La vida en el centro. Historias, problemas y horizontes de 5 organizaciones comunitarias de base en tiempos de confrontación y pandemia (Cochabamba-Bolivia)”.

a familias con dificultades económicas. A través de este caso se evidenció el proceso organizativo de las mujeres que trabajan en estos centros, brindando trabajos de cuidado en condiciones de precarización laboral extrema.

En el área rural se presenta el caso del sindicato agrario¹³ de la comunidad de Chawpi Melga. Esta organización enfrenta en su cotidianidad un conjunto de problemáticas que no solo tienen que ver con las dificultades productivas relacionadas con los efectos del cambio climático –como la preocupante disminución de las fuentes de agua–, sino también con el resultado del modelo productivo imperante en el país, que está centrado en la acumulación capitalista y no en la pequeña y mediana producción agropecuaria.

Por último, desde el Valle Alto Cochabambino se presenta el caso de la Asociación de Regantes “Pozo de Flores”. Esta es una organización particular porque está constituida principalmente por mujeres que se han organizado para hacer frente a la cada vez más difícil posibilidad de tener acceso a agua para la producción agrícola, así como también para contrarrestar las prácticas machistas de las organizaciones de riego tradicionales que existen en la región, generando otras dinámicas para la toma de decisión y escucha entre mujeres.

Autogestión para el cuidado de la vida: premisa de estas organizaciones

La autogestión es una de las primeras claves a la hora de abordar a las organizaciones de base que tienen en el centro la reproducción colectiva de la vida.

¹³ Los sindicatos agrarios, que comenzaron a emerger en la década de los años 20 del siglo pasado, se masificaron luego de la Revolución Nacional de 1952 y la consecuente Reforma Agraria en 1953. Si bien es una estructura organizacional bastante vertical, en gran medida copia de las estructuras sindicales mineras, con el tiempo adquirieron una dinámica propia. Los sindicatos agrarios campesinos, por lo general operan como gobiernos comunitarios en los que se definen un conjunto grande de cuestiones relativas a la vida en la comunidad.

En las OTB de barrios marginales la autogestión es, simplemente, parte de la cotidianidad. Aunque la noción de este tipo de organizaciones barriales tiene su asidero en la Ley de Participación Popular, de los años 90 –en pleno auge neoliberal–, que tenía la intención de que las instituciones públicas se desentiendan de la gestión barrial, con el tiempo ha habido una apropiación de esta figura legal por parte de organizaciones barriales urbanas. Es decir, cuando se llega a conocer la historia de los barrios populares, se entiende que primero existe la trama comunitaria que permite la gestión colectiva de un conjunto de asuntos públicos en un barrio y luego, desde esa trama, se busca el reconocimiento del estado para acceder a –y en muchos casos disputar– un conjunto de recursos públicos para el mejoramiento del barrio.

Tanto en el caso de la OTB San Nicolás, como en la OTB Los Olivos, es posible evidenciar que estos barrios comenzaron a formarse –uno a finales de los años 90 y otro a finales de la primera década del siglo XX– con el asentamiento de familias en lugares en los que previamente existían actividades agropecuarias. Durante los primeros años fue el trabajo colectivo de las personas que se fueron asentando en esos territorios el que dio forma a los barrios. Fueron los vecinos quienes realizaron la planimetría, la construcción de los primeros caminos, la gestión para lograr una escuela y el alumbrado público, la organización de cooperativas para acceder a agua de manera colectiva, etc. Así lo explica un vecino de San Nicolás¹⁴:

¹⁴ Todas las citas de testimonios que se presentan de acá en adelante corresponden a información recabada por el CEESP en el año 2021, en el marco de talleres y entrevistas realizadas con 5 organizaciones de base (2 OTB de la Zona Sur de Cochabamba, 1 Organización de cuidadoras de centros infantiles comunitarios, 1 sindicato agrario y 1 asociación de regantes mujeres del Valle Alto de Cochabamba), esta información es presentada de forma anónima ya que este fue el compromiso del CEESP al momento de levantar la información correspondiente.

Y decirles que, desde la fundación, pues, no había nada en este sector, era todo rústico, área de pastoreo, donde no había prácticamente nada de mejoría. Entonces no tenías casi nada, ni las calles estaban bien aperturadas. Actualmente, bueno, ha sido un logro, [...] siempre hemos tenido esta iniciativa de poder hacer algunos proyectos, el tema del colegio o lo que es el agua. Entonces ha sido sacrificado manejar la organización, no ha sido sencillo, y es muy complicado, pero hasta hoy hemos logrado superar. Gracias también al trabajo de la dirigencia y principalmente al apoyo de los mismos vecinos, porque sin ellos no podemos hacer nada, ¿no es cierto?

De manera similar sucede con las organizaciones rurales, como es el caso de la comunidad de Chawpi Melga. Los habitantes de esta se organizan en torno al sindicato agrario, cuyas asambleas se realizan una vez cada tres meses. En ellas todas las familias de la comunidad participan con un representante y es ahí donde se toman las principales decisiones sobre la autogestión territorial y social de la comunidad. Los asuntos que gestionan varían desde el manejo conjunto de las acequias para riego hasta el seguimiento a la escuela y a quiénes se hacen cargo de ella, pasando por un conjunto de decisiones de orden “externo”, es decir, relativos a la gestión de los vínculos con instituciones estatales, ya sea elevando peticiones a instituciones públicas o, de ser necesario, organizando alguna movilización, marcha o bloqueo como mecanismo de presión.

En el caso de la Asociación de Productores Pozo de Flores y de la Asociación de Educadoras y Manipuladoras de los Centros Infantiles Comunitarios, la producción de decisión colectiva es una cuestión mucho más específica, referida a algunas dimensiones más concretas. En el primer caso, esta decisión tiene que ver con la gestión de un pozo de agua y, en especial, con la distribución de este recurso hídrico. Una vez al mes,

las 25 asociadas se reúnen para debatir temas referentes a un conjunto de temas que gestionan a través de la organización: el mantenimiento del pozo, la utilización de los turnos, el pago de la energía eléctrica, la lectura y control de la tarifa del agua. Aunque también, el pozo se ha constituido como base organizativa para generar otras articulaciones, con otras organizaciones y con otras luchas, como ha sucedido cuando la organización de mujeres que gestiona este pozo se ha articulado a distintos procesos que han surgido en la región contra la violencia machista.

En cambio, la asociación de Educadoras y Manipuladoras de los Centros Infantiles Comunitarios se constituye en un espacio organizativo de más de 120 mujeres que se dedican a los trabajos de cuidado. Esta asociación no solo asume un rol fundamental para resguardar los intereses de estas trabajadoras, las cuales se ven expuestas a una gran precarización laboral e invisibilización de su condición de trabajadoras cuidadoras, sino también para generar vínculos de solidaridad y apoyo colectivo en el ámbito urbano, vínculos que se hicieron especialmente evidentes en tiempos de pandemia. De la misma manera, otro componente importante que da vida a esta asociación es aquel que tiene que ver con la actividad laboral de ellas mismas, sus actividades están específicamente relacionadas con el cuidado de más de 1.500 niños en sectores populares de la ciudad de Cochabamba. Y si bien para el funcionamiento de estos Centros Infantiles Comunitarios se cuenta con el financiamiento parcial de la Alcaldía de Cochabamba, gran parte de la gestión cotidiana de los mismos se realiza de manera autogestionada y en vínculo directo con las madres y padres de familia que dejan a sus hijos en estos centros.

En síntesis, aunque ninguna de estas organizaciones es totalmente autónoma y autogestiva, lo que acá se pretende recalcar es que

todas ellas existen en torno a fines relacionados con dimensiones del cuidado y reproducción cotidiana de la vida, y lo que les da condición de sostenibilidad a través del tiempo son todos aquellos mecanismos de articulación que se sostienen en decisiones que se producen de manera compartida y en gran medida autónoma, fuera de estructuras estatales.

Los problemas que enfrentan las Organizaciones Comunitarias de Base

Las organizaciones anteriormente mencionadas se enfrentan a una variedad de problemas cotidianos que derivan en agendas reivindicativas de amplio espectro, las cuales van desde la intención de solucionar la carencia de agua potable hasta el mejoramiento en el acceso a un sistema sanitario digno. Si bien las organizaciones tratan, desde la autogestión y con poco apoyo estatal de hacer frente a estas problemáticas, sus esfuerzos no alcanzan a solucionarlas, más aún en un escenario estatal tan polarizado en el que los problemas más acuciantes para la población son empujados a un segundo plano en el orden de prioridades.

A continuación, ponemos en consideración algunas de estas problemáticas:

El agua que no deja de ser escasa

El acceso al agua –esta necesidad tan básica– es la que preocupa en primera instancia a la mayoría de las organizaciones urbanas como rurales. En las últimas décadas, los valles de Cochabamba se han caracterizado por una escasez endémica de este recurso natural. No por nada existe un gran conjunto de organizaciones sociales que tienen vida en torno a su gestión. En este campo están todas las organizaciones de regantes, mientras que en

la zona urbana –en especial en los barrios populares– existen muchas organizaciones que tienen como objetivo proveer de manera autónoma este recurso. Las más reconocidas son las cooperativas de agua, muchas de las cuales gestionan pozos, aunque también existen organizaciones más pequeñas mediante las cuales se administran tanques colectivos que son llenados con agua transportada por camiones cisterna u otros medios de distribución de este recurso.

Lo que se pudo evidenciar es que esta problemática está más presente que nunca. Pese a que ya desde hace algunos años atrás buena parte de la ciudad de Cochabamba cuenta con agua proveniente del Proyecto Múltiple Misicuni,¹⁵ la realidad es que los barrios periféricos de la Zona Sur de Cochabamba –donde se encuentra el Distrito 9– todavía no se benefician de este proyecto. En realidad, la mayoría de los habitantes de esta zona continúan accediendo a agua para consumo mediante camiones cisterna, lo cual no solo representa un riesgo en términos sanitarios, sino que también es el esquema de acceso al agua más caro de la ciudad. Situación que es muy paradójica en un país en el que el acceso a este recurso es considerado por la Constitución Política del Estado como un derecho humano, sin embargo, los sectores populares se ven insertos en complejos –y muchas veces extorsionadores– mecanismos mercantiles que giran en torno a este recurso.

En medio de la pandemia y de la crisis económica que se desató a raíz de ella, el acceso al agua se dificultó aún más, tal y como lo explica una vecina de la OTB San Nicolás:

¹⁵ “El Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) nace con el objetivo de cubrir las urgentes necesidades de agua en la población de Cochabamba, mediante el aprovechamiento de las aguas de las Cuencas de los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, ubicadas en la cordillera de Cochabamba. El Objetivo Institucional, es la Dotación de Agua Potable, Agua para riego y la Generación de Energía Eléctrica”.

Lamentablemente [en la cuarentena] yo me quedaba en la casa a llorar nomás, porque hay gente que no tenía ni para comprar un turril de agua. La verdad, dios no más sabe cómo esas familias han hecho para subsistir.

Yo cuando agarraba agua de cisterna, el de la cisterna me preguntaba: “¿tienes para pagarme?”, así me decían. Yo le respondía: “¿por qué me preguntas?”, y me respondían: “es que me hacen descargar a sus turriles, a sus tanques y luego me dicen: ‘después nomás te voy a pagar’”. Así me decían.

De igual manera, la carencia del agua afecta de sobremanera a la región rural cochabambina, donde solo el 22% de las áreas cultivables tiene acceso a riego (Ormachea, 2018). Esta realidad ha sido constatada tanto en la región de Sacaba, donde se encuentra la comunidad de Chawpi Melga, así como en la región de Arani, donde está la Asociación de Regantes Productores Pozo de Flores. En ambos casos los manantiales y los afluentes han disminuido su caudal año tras año, lo que está afectando a la producción y generando tensiones entre los pequeños productores agropecuarios. Esto es lo que comentan desde las asociadas del Pozo de Flores, en Arani:

Yo tengo 40 años, me acuerdo bien cuando era niño, teníamos mucha agua y se sembraba de todo, ahora se han vuelto tierras temporales. Había tres ríos, Pajchiri, Wiskana y el río Pocoata, que venía en abundancia hasta aquí para regar nuestros terrenos. Pero con el tiempo se han ido secando, las aguas llegaban a los terrenos de Villa Flores, donde ahora tenemos nuestros terrenos.

También hemos regado con las aguas de la laguna artificial que han hecho, pero agua retenida y salada y con el tiempo nuestros terrenos se volvieron salitrosos y duros. Aun así, solíamos regar por turnos. Mas antes todo se podía sembrar y vender, hoy en día solo se siembra para sobrevivir, por eso estamos buscando

otras oportunidades, por ejemplo, en estas fechas ya deberíamos estar sembrando papa, pero eso ya no podemos hacer. Eso ha hecho, como dice la dirigente, que tengamos que organizarnos para tener agua.

Pero es en serio, todo se veía una tristeza. No sé. De verdad nos afectaba a todos, creo que psicológicamente. Estábamos cabizbajos, tristes. Así andábamos toda la gente.

En el caso de las mujeres del Pozo de Flores, la gestión del agua va todavía más allá, ya que permite enfrentar los mecanismos patriarcales de exclusión femenina presentes en las tradicionales organizaciones de regantes. La asociación de mujeres, como espacio organizativo, es aquel lugar donde logran deliberar sobre la gestión del agua y también sobre las múltiples problemáticas que afectan a sus vidas; es un espacio casi exclusivo de y para mujeres –salvo un par de socios varones que participan por la colaboración que brindan a la asociación–. De la misma manera, la titularidad sobre el derecho al uso del agua las habilita para tener voz en las organizaciones matrices, como la Asociación de Regantes de Arani, aunque siempre en un lugar incómodo por las formas patriarcales que organizan la vida política de estas instancias.

Por la centralidad que tiene el agua para la vida, este tema se posiciona en primer lugar en la agenda de la mayoría de las organizaciones de base.

Lo que la pandemia reveló de la situación sanitaria

Desde que la pandemia hizo aguas en Bolivia, la precaria situación sanitaria del país no hizo más que empeorar. Cada pico de la pandemia significó el colapso del sistema de salud pública, e incluso, en muchos casos, también el de la red de hospitales y clínicas privadas. Las dramáticas imágenes que hicieron

eco de esta crisis sanitaria son estremecedoras, las más duras fueron aquellas que mostraron los cadáveres de las personas que murieron en las calles o fuera de los hospitales, luego de deambular en búsqueda de atención médica para tratar los síntomas de covid-19.

En este escenario, han sido los sectores populares los que han llevado la peor parte. Más del 70% de la sociedad boliviana no cuenta con un seguro de salud,¹⁶ y es de suponer que la mayoría sean de estratos populares. Los testimonios son dramáticos y demuestran que, ante el colapso del sistema sanitario, la pandemia tuvo que ser afrontada de manera individual o familiar. Dados los riesgos que implica la transmisión del virus y la necesidad de gestionar una “distancia social”, fue muy difícil para las organizaciones autogestionar colectivamente una solución para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Al respecto, un vecino de la OTB Los Olivos explica la situación:

[Si una persona se enferma de coronavirus] se aísla en su casa y va tomando su medicina tradicional, gárgaras con sal, con bicarbonato y otros productos tradicionales que existen en el lugar y con eso se está curando. Y sí, hay personas que se han descuidado, lamentablemente están muriendo en estos lugares. Uno ve y escucha que “tal persona murió, que otra persona se murió”. O se ve que están yendo al cementerio allá arriba, y así entierran a la persona que murió. ¿Eso qué significa? que esa persona no ha ido a un establecimiento de salud, no porque no quiere, sino sencillamente porque no tiene ese recurso económico necesario para acudir al establecimiento de salud y ha tratado de curarse solamente en su domicilio.

¹⁶ Desde el año 2019 entró en vigor el Seguro Único de Salud (SUS) al que puede inscribirse cualquier persona que no tenga acceso a un seguro sanitario (público o privado), el problema es que la cobertura de este seguro es limitada y no cubre gastos mayores.

A propósito de la pérdida de una compañera de trabajo, una educadora de los Centros Infantiles Comunitarios de la ciudad de Cochabamba comentó lo siguiente:

Mi compañera trabajaba conmigo, en el centro infantil, es una pena que mi compañera, que en paz descansa la señora Marina, falleció debido a que lastimosamente, como tenía una enfermedad de base, le atacó el covid que le llevó a la muerte y lo peor es que no había los recursos, no había de dónde la familia pueda sacar recursos. Entonces, le cuento esa experiencia amarga porque de algún modo yo lo viví, y era una señora con mucha trayectoria de trabajo en los centros infantiles, con más de 30 años, si no me equivoco, de servicios que no fueron muy bien remunerados porque no se contaba y no se cuenta actualmente con beneficios sociales, no se tiene un aporte AFP, no hay Seguro de salud.

Es una tristeza porque solas tenemos que levantarnos a lidiar con cada problema a diario, ver cómo enfrentar el día a día para llevar el pan del día a nuestros hijos.

Algo similar, aunque todavía con una distancia mucho mayor respecto al sistema de salud, es lo que expresan los habitantes rurales de la comunidad de Chawpi Melga:

-Nosotras nos cuidamos con las hierbas que tenemos en la zona, no podemos ir al hospital, es mucho dinero, no podemos pagar. Así nos aguantamos. Prefiero morir en mi casa que ir al hospital.

-En el campo no tenemos dinero, ganancia, y para ir al médico o al hospital nos piden garantía de 35 o 70 bolivianos, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero?, por eso aquí nomás nos cuidamos con las hierbas que tenemos.

-No vamos al hospital porque igual vamos a morir nomás, ahí entran para morir, por eso nos quedamos en nuestras casas, además nos piden mucho dinero, es gasto, nosotros no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a traer?

Si bien existe una preocupación por las consecuencias que la pandemia tiene sobre la salud de las personas y sus efectos para la vida de los vecinos y comunarios, también se identifica con claridad el problema de los elevados costos de la atención médica. La falta de acceso a un servicio de salud de buena calidad ha llevado a un elevado grado de naturalización de la precariedad sanitaria, como si fuese un problema que únicamente debe resolverse a nivel familiar o individual y, sumado a esto, una desconfianza en el sistema de salud –tanto por sus costos como por su trato–, por lo que las familias prefieren recurrir a la medicina tradicional u otras opciones privadas.

Si bien algunas OTB, como Los Olivos, tienen propuestas concretas para enfrentar la pandemia, como aquella que refiere a la construcción de un hospital en su territorio –para lo cual tienen reservado un espacio específico y esperan que las autoridades locales y departamentales financien el proyecto–, no existe una crítica profunda a la situación general de la salud. Como se evidenció, el contar con un centro de salud cercano no es sinónimo de garantías de acceso a una atención sanitaria. Gran parte de la atención pública no es gratuita y es de mala calidad, y la atención privada, que tampoco siempre es buena, tiene costos muy elevados.

Es así como, a diferencia del tema relacionado con el agua, que ya tiene una larga tradición de lucha y que produce articulaciones potentes al interior de la sociedad cochabambina, el tema salud, que históricamente ha sido descuidado, adquiere una relevancia particular como consecuencia de la pandemia en los sectores populares de Cochabamba. Y aunque se esperaba que con la emergencia sanitaria este tema escalase en el orden de prioridad de las agendas populares, ello no sucedió, la naturalización de la precariedad sanitaria y el hecho de que finalmente este es

un tema que se asume como individual o familiar, ha generado un estancamiento en las reivindicaciones en torno a esta problemática.

De todos modos, se espera que con el tiempo esta dimensión adquiera cada vez más relevancia y sea una base para la producción de sentidos disidentes en torno al cuidado de la vida.

Precarización de los pequeños productores agrícolas

En Bolivia la concentración de la tierra no ha dejado de ser un problema central luego de la Reforma Agraria de 1953, en realidad este hecho histórico derivó en una estructura dual de la tenencia de la tierra con grandes latifundios en el oriente del país y pequeñas propiedades en el occidente, lo que algunos denominan como “minifundio” o, en algunos casos, como “surcofundio”. Según el Censo Agropecuario de 2013, se estima que en Bolivia el 58,9% de las Unidades Productivas Agropecuarias –que tienen entre 0,01 hectáreas y 4,99 hectáreas–, representan el 2,1% de toda la superficie que tienen las Unidades Productivas del País (Ormachea, 2018).

El caso de Cochabamba la gran fragmentación de la propiedad agraria es una parte consustancial de la historia de la región, problema que se acentuó luego de la distribución de tierras durante la Reforma Agraria. Se estima que el departamento de Cochabamba tiene el menor promedio de extensión de propiedad agrícola del país, que ronda las 6 hectáreas por Unidad Productiva Agropecuaria.

Este problema, junto a la escasez de agua, es una de las principales preocupaciones para los pequeños productores agropecuarios. La elevada fragmentación en la propiedad de la tierra está generando que las nuevas generaciones se vean imposibilitadas

de continuar realizando labores agrícolas, ello está presionando a una migración masiva de jóvenes hacia las ciudades capitales del país, hacia el extranjero y hacia el trópico cochabambino, que se ha vuelto un territorio receptor de población migrante de todo el país. Así lo expresa un comunario de Chawpi Melga:

Tenemos el problema de que la gente se está yendo de la comunidad, ahora nos estamos quedando solo personas mayores. Es muy lamentable. Nuestros hijos están en Estados Unidos, también en Cochabamba o Santa Cruz. Muchos también se han ido al Chapare.

Es que aquí no alcanza la tierra. Digamos, cuando nos han repartido la tierra ya era pequeño, pero eso ahora no alcanza para los hijos, ¿qué van a hacer los nietos? Se van a buscar la vida a otro lado. Pero acá nos vamos a quedar puro mayores ¿qué vamos a hacer?

Con un alcance mucho más inmediato, aunque no por ello menos importante, el problema histórico del campesinado sigue cobrando factura a los pequeños productores y es el bajo precio de sus productos en el mercado. Son muchos los estudios –en todo el mundo– que abordan esta problemática y que señalan la manera en que el modo de producción campesino termina subvencionando al capital a través de un conjunto de mediaciones y subsunciones (Bartra, 1979; Shanin, 1976).

Sin embargo, esta dinámica, está adquiriendo una nueva dimensión en la economía boliviana debido al inusitado incremento de las importaciones y contrabando de alimentos frescos. Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2010 Bolivia importaba un valor de 370 millones de dólares en alimentos, para el año 2018 esa cifra casi se duplicó, alcanzando los 655 millones de dólares. “Esto sin considerar las internaciones por contrabando que, según diversos estudios

del INE no publicados, representan hasta un tercio de las importaciones legales” (Prudencio, 2013).

Esta temática está inscrita en un escenario mucho más grande: el modelo agrario que se impulsa en Bolivia. Si bien el 87 % de los alimentos frescos que se consumen en el país provienen de la pequeña producción agropecuaria –principalmente campesinos– (Czaplicki, 2021), este sector no recibe la atención mínima necesaria, ya que las políticas públicas están destinadas a favorecer principalmente al sector agroindustrial en la región oriental del país. Este modelo agroindustrial, que se intensificó desde la época neoliberal, presenta como principal objetivo la incorporación de monocultivos para la exportación, lo que a su vez tiene como correlato un esquema extremadamente desigual de distribución de excedentes (McKay, 2018), sin contar toda la depredación ambiental que implica para la región amazónica del país. Además, como sucede con el Perú, la posibilidad de exportar granos de la agroindustria a ese país está condicionada a que Bolivia permita la importación de productos agrícolas frescos.

Con todo, este modelo tiene grandes implicaciones sobre la producción campesina, precarizando las condiciones de vida de los pequeños productores y volviendo inviable la sostenibilidad de esta forma de producción de alimentos. Esta problemática, si bien está cada vez más presente en la realidad boliviana, no ha logrado obtener la atención necesaria desde las cúpulas de las organizaciones sindicales campesinas.

Los trabajos de cuidado en el centro

En estos tiempos pandémicos ha quedado expuesta con crudeza la importancia que los trabajos de cuidado tienen para sobrellevar este tipo de crisis. Las cuarentenas, los cierres de establecimientos educativos, la atención necesaria para los pacientes de la covid-19

y de otras enfermedades que no recibieron atención médica en los picos de la pandemia, han sido los principales motivos para el incremento de los trabajos de cuidado que, como ya se sabe, recaen fundamentalmente sobre las mujeres.

Este incremento desmesurado de los trabajos de cuidado ha estado correlacionado no solo con un aumento de la violencia en los hogares, sino también con la precarización de las condiciones de vida de muchas mujeres que, al tener que dedicar más tiempo a los cuidados o al perder sus fuentes de ingresos debido a la crisis económica, son hoy más dependientes de los ingresos de sus parejas o de otros miembros de la familia.

Esta situación se ha intensificado con particular énfasis en las áreas urbanas. En el caso de las OTB, las mujeres de estas organizaciones señalaron que han visto aumentar significativamente sus tareas, debido a que ahora también deben hacerse cargo de los trabajos educativos de sus hijos. De la misma manera, han resentido un aumento de la violencia doméstica, llegando incluso a registrarse feminicidios.

A través de la experiencia de la Asociación de Educadoras y Manipuladoras de los Centros Infantiles Comunitarios de Cochabamba, no solo se evidenció el incremento de la precarización y las violencias, sino también el desentendimiento de las instituciones respecto a los trabajos de cuidado. Cuando los centros de cuidado de niños cerraron sus puertas no solo las trabajadoras de estos centros quedaron en una situación de vulnerabilidad, sino que miles de mujeres de sectores populares quedaron recargadas de aún más trabajos de cuidado al tener que hacerse cargo de sus hijos pequeños, al mismo tiempo que los propios niños se vieron expuestos a dinámicas de violencia y descuido.

Pero en tiempo de pandemia, el año pasado, nos han dejado a la deriva, no les ha importado a ninguno dejarnos sin empleo, ni a la gobernación ni al municipio. Y realmente la mayoría de nosotras somos mamás solteras, viudas, entonces nosotras debemos de trabajar por nuestros hijos

Y esta pandemia nos ha afectado en gran manera, sin fuente laboral no sabemos qué hacer. Bueno, vamos vendiendo, ambulando, sacando lo que se puede para llevar por lo menos un pan para nuestros hijos. Es lamentable que en esta pandemia las autoridades no tomen conciencia o no hayan valorado el trabajo que nosotras realizamos.

Si bien en Bolivia la Constitución Política del Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y, en el caso concreto de Cochabamba, se cuenta desde 2019 con una Ley que plantea la Corresponsabilidad en el Trabajo de Cuidado no Remunerado Para La Igualdad de Oportunidades, estas normativas no han sido de ninguna manera suficientes para garantizar los derechos de madres y niños.

Vivimos en un mundo en el que pareciera normal que gran parte de los trabajos de cuidado, principalmente aquellos realizados por mujeres, no sean remunerados. Se asume como algo natural que ciertas tareas –al interior de los hogares y fuera de estos– tengan que ser realizadas por mujeres por el hecho de ser mujeres. En la mayoría de los casos, el cuidado de los hijos, ancianos, enfermos, así como la realización de tareas domésticas se asume como una actividad eminentemente femenina.

Otras agendas invisibilizadas

El agua, la salud y el modelo productivo agropecuario quizá son las temáticas a las que las organizaciones comunitarias de base les dan mayor importancia, y que en gran medida se

constituyen en problemáticas comunes a todas ellas –incluida la del modelo productivo agropecuario, principal motivo de migración hacia las ciudades–. Sin embargo, en los diálogos que se sostuvo con dichas organizaciones, los problemas y necesidades expresados son muchos más. Desde la inseguridad ciudadana –principalmente en barrios populares urbanos– hasta la dificultad que tienen los pequeños productores para acceder a los mercados campesinos en las ciudades, pasando por la falta de servicios, como electricidad o alcantarillado, así como diversos problemas de reconocimiento jurídico que impiden la canalización de recursos desde esferas públicas. En fin, la gran mayoría de estas agendas populares no están siendo discutidas a profundidad en el escenario público-estatal y, en el mejor de los casos, se presentan como reivindicaciones aisladas, a través de movilizaciones y/o bloqueos, bajo el mismo esquema tradicional de fragmentación que caracteriza a la sociedad cochabambina.

A manera de cierre: agendas populares como grietas para una política alternativa

Las elecciones bolivianas de 2019 desataron un espectro de violencias sin precedentes en la historia reciente del país. Una disputa por el estado que no tuvo reparos de llevarse por delante todo lo que hallase en su camino, incluyendo decenas de vidas humanas. En ese contexto, está costando generar explicaciones que vayan más allá de aquellas que recrean las narrativas del poder.

Esto, en buena parte, tiene que ver con que durante la última década la *transformación social* ha sido –y en gran medida sigue siendo– concebida desde un lente eminentemente estadocéntrico. Gran parte de las organizaciones sociales que durante el primer lustro del siglo XXI apostaron por transformarlo todo y lucharon desde las calles contra el embate neoliberal –evocando la aspiración de que un “otro mundo es posible–, terminaron delegando su prerrogativa de lucha y transformación a la institucionalidad estatal, misma que, por definición, en toda circunstancia intenta monopolizar cualquier dimensión política de la vida social. Por otro lado, similar problema encontramos en buena parte de la “izquierda boliviana” y en su intelectualidad, que no ha sido capaz de mirar más allá del estado, llegando incluso a deslegitimar y/o agredir a cualquier reivindicación popular que intentase trascender esa obtusa mirada estadocéntrica. El uso indiscriminado de las *palabras mágicas* (Rivera, 2018) con las que los políticos han buscado legitimar el “proceso de cambio”,

también han tenido como consecuencia la generación de un vacío semántico que dificulta nombrar críticamente lo que ha sucedido en los últimos años.

En este sentido y con la intención de actualizar discusiones críticas sobre lo que viene pasando en Bolivia, lo que nos enseña la experiencia cochabambina abordada en este documento, es que este departamento, pese a ser una región con un elevado nivel de fragmentación social –lo que deriva en una persistente situación de tensión y movilización– existe una diferencia sustancial entre los diferentes conflictos que se suscitaron en esta región. Están, por un lado, los conflictos sociales que se producen a raíz de las disputas que distintos actores partidarios sostienen por el control del estado; mientras que, por otro lado, están aquellos conflictos que se organizan en torno al cuidado colectivo de la vida. Este último tipo de conflictividad –como la Guerra del Agua– ha derivado en portentosas luchas sociales que impugnaron distintas dimensiones de poder, mientras que la conflictividad centrada en la disputa estatal derivó en procesos de polarización política, enfrentamientos al interior de la sociedad civil y neutralización de luchas populares.

Pero, como era de esperar, poco a poco se van abriendo pequeñas *grietas* (Holloway, 2010) que dan un poco de aire. Están aquellas grietas impulsadas por renovadas luchas que empiezan a actualizar la discusión política en el país, como algunas de las luchas feministas y territoriales que intentan retomar fuerzas para resguardar sus propias agendas y formas de vida. Pero también las grietas se producen porque los discursos estatales terminan cayendo por su propio peso, siendo difícil sostener una polarización permanente como forma de la gestión política estatal sin que emerjan las verdaderas determinantes del antagonismo social. Ni el prolongado gobierno de Morales, ni el

atrabancado y violento gobierno de Añez, ni el actual gobierno de Arce han puesto *la vida en el centro*; todo lo contrario, a partir de distintas formas de gestión de la política, todos estos gobiernos han profundizado en un modelo depredador con grandes consecuencias para la población en general, y en especial para los sectores más precarizados. Consecuencias que no solo han generado una creciente inconformidad en la población, sino que también obligan a retomar posturas y miradas políticas que se alejan del tutelaje estatal como horizonte de transformación y reconocen la importancia de otras formas de hacer política, desde lo comunitario y desde *la centralidad de la vida humana y no humana*.

Para finalizar, planteamos de manera sintética algunos elementos que consideramos útiles a la hora de abordar la realidad boliviana en el presente, pequeños resquicios o grietas que permiten/habilitan mirar lo que sucede en el país desde otro lugar:

- La actualización de horizontes emancipatorios que surgen *desde abajo* es un proceso sinuoso y frágil en el contexto boliviano actual, después de años en los que se impuso como hegemónica una lectura estadocéntrica del cambio social. Sin embargo, si bien en las últimas décadas la política estatal ha arremetido duramente contra las formas organizativas comunitarias, sigue existiendo un tejido social relativamente robusto en Cochabamba y en Bolivia. Es evidente que en este momento se encuentra replegado principalmente a actividades relacionadas con el cuidado de la vida –y en muchos casos se ha visto limitado a la sobrevivencia inmediata–, con muy poca capacidad de impugnación del orden dominante establecido –incluso, en ciertos casos, llegando a ser funcional a este–.
- Aún no queda claro cómo se van a tejer agendas compartidas que permitan fortalecer los vínculos hacia un renovado movimiento social comunitario. Queda claro, sin embargo, que

esas agendas compartidas se producirán a partir de procesos organizativos en torno a problemáticas concretas que tienen que ver directamente con la reproducción de la vida. Estas agendas, sistemáticamente invisibilizadas y subvaloradas en un escenario público dominado por otros intereses, tienen repercusiones directas en la vida de las personas, comunidades, barrios y otros ámbitos sociales –generalmente situados en los márgenes–, lo cual genera *formas de una política de la vida cotidiana* que trasciende lo partidario y sus lógicas de organizar lo social. Es por este motivo que las luchas que se generen a partir de ellas son las que permiten repensar la política más allá de una mirada estancada en la polarización.

- De ninguna manera consideramos útil reproducir miradas románticas sobre el tejido social comunitario o sobre las organizaciones de base. Si bien su potencia de lucha y de impugnación es y ha sido históricamente fuente central de las transformaciones sociales en Bolivia, también se debe reconocer que en su interior operan un conjunto de problemas que no son menores y que terminan debilitando, neutralizando y en muchos casos reproduciendo dificultades que limitan la posibilidad de transformaciones sociales en el largo plazo. Algunos de estos problemas tienen que ver con:
 - La herencia colonial y patriarcal que terminan por reproducir “horizontes emancipatorios” limitados a poderes masculinos y estereotipados, excluyendo a las mujeres y a la juventud de la toma de decisiones, recreando verticalidades y estilos de liderazgo que impiden pensar en transformar el poder, repitiendo, entre otras cosas, los esquemas caudillistas y unipersonales tan conocidos en la historia boliviana.
 - La tensión que existe entre la autogestión territorial para resolver las necesidades colectivas inmediatas –

tierra, agua, salud, por ejemplo— y la relación clientelar y *demandista* con el estado, es un problema que brota reiteradamente en el escenario boliviano de lucha social. ¿Quién se hace cargo de la transformación social a través del tiempo? Es una pregunta que ha sido poco discutida al interior de las organizaciones comunitarias de base.

- Muchas veces los horizontes de transformación social, en un mundo en el que opera una gran presión capitalista y una lógica estatal de la política, quedan inscritos en una ilusión emancipatoria desarrollista, ligada a procesos de despojo y depredación, los cuales parecieran quedar superpuestas en un primer plano, por sobre la importancia del cuidado de la vida.

Esperamos que este texto, que hace parte de un conjunto de esfuerzos que emergen en el presente boliviano, sirva para ayudar a abrir discusiones críticas y útiles en el tan árido e inmovilizador escenario político nacional. Escenario que, durante los últimos años, se ha caracterizado por el intento de organizar toda lectura e interpretación de la realidad desde un lente binarista, que termina invisibilizando las agendas sociales centradas en el cuidado y reproducción de la vida, cuando son aquellas las que, si se mira en la historia profunda del país, han sido las que han dado lugar a las luchas emancipatorias más potentes. La experiencia cochabambina expuesta en este documento nos ha servido como un punto de partida para presentar estas claves críticas, sin embargo, esperamos que algunas de ellas tengan resonancia en otras geografías y realidades.

Bibliografía

- Albó, Xavier. (2009). *Larga memoria de lo étnico en Bolivia, con temporales oscilaciones*. En John Crabtree, George Gray, & Laurence Whitehead (Eds.), (pp. 19-40). La Paz: Plural/PNUD.
- Bartra, Armando. (1979). *La explotación del trabajo campesino por el capital* (1º). México D.F.: Macehual.
- Chaski Clandestina. (2019). *Un reporte vecinal desde la Ladera Oeste: Un día histórico y una noche de zozobra y organización vecinal en La Paz*. Chaski Clandestina. La Paz. Recuperado de: <https://chaskiclandestina.org/2019/11/11/un-dia-historico-y-una-noche-de-zozobra-y-organizacion-vecinal-en-la-paz/>
- Czaplicki, Stanislaw. (2021). *Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: caracterización, contribución e implicaciones*. La Paz: CIPCA.
- Echeverría, Bolívar. (1998). *Valor de uso y utopía*. México: Siglo XXI.
- Federici, Silvia. (2010). *Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Galindo, María. (2019). Bolivia: La Noche de los cristales rotos, por María Galindo. *La Vaca*. Buenos Aires. Recuperado de: <https://lavaca.org/notas/bolivia-la-noche-de-los-cristales-rotos-por-maria-galindo/>
- Gordillo, José. (2007). *Elites cochabambinas en clave etnográfica*.

T'inkazos, (22).

Gordillo, José, Rivera, Alberto, y Sulcata, Ana. (2007). *¿Pitaa kaypi kamachiq?. Las estructuras de poder en Cochabamba, 1940-2006*. La Paz: CESU/DICYT/UMSS/PIEB.

Gotkowitz, Laura. (2011). *La revolución antes de la revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia. 1880-1952*. La Paz: Plural/PIEB.

Gutiérrez, Raquel. (2009). *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*. México: Sísifo/Bajo Tierra/ICSH.

Gutiérrez, Raquel, Navarro, Mina, y Linsalata, Lucía. (2016). *Repensar lo político, pensar lo común. Claves para la discusión*. En Daniel Inclán, Lucía Linsalata, & Mátgara Millán (Eds.), *Modernidades alternativas*. Ciudad de México: UNAM/Ediciones Lirio.

Holloway, John. (2010). *Cambiar el mundo sin tomar el poder*. México: Sísifo Ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSyH-BUAP.

Jackson, Robert, y Gordillo, José. (1993). *Formación, crisis y transformación de la estructura agraria de Cochabamba. El caso de la hacienda Paucarpata y de la comunidad del Passo, 1538-1645 y 1872-1929*". *Revista de Indias*, LIII(199), 723-760.

Kohl, Benjamin, y Farthing, Linda. (2007). *El bumerán boliviano*. La Paz: Plural.

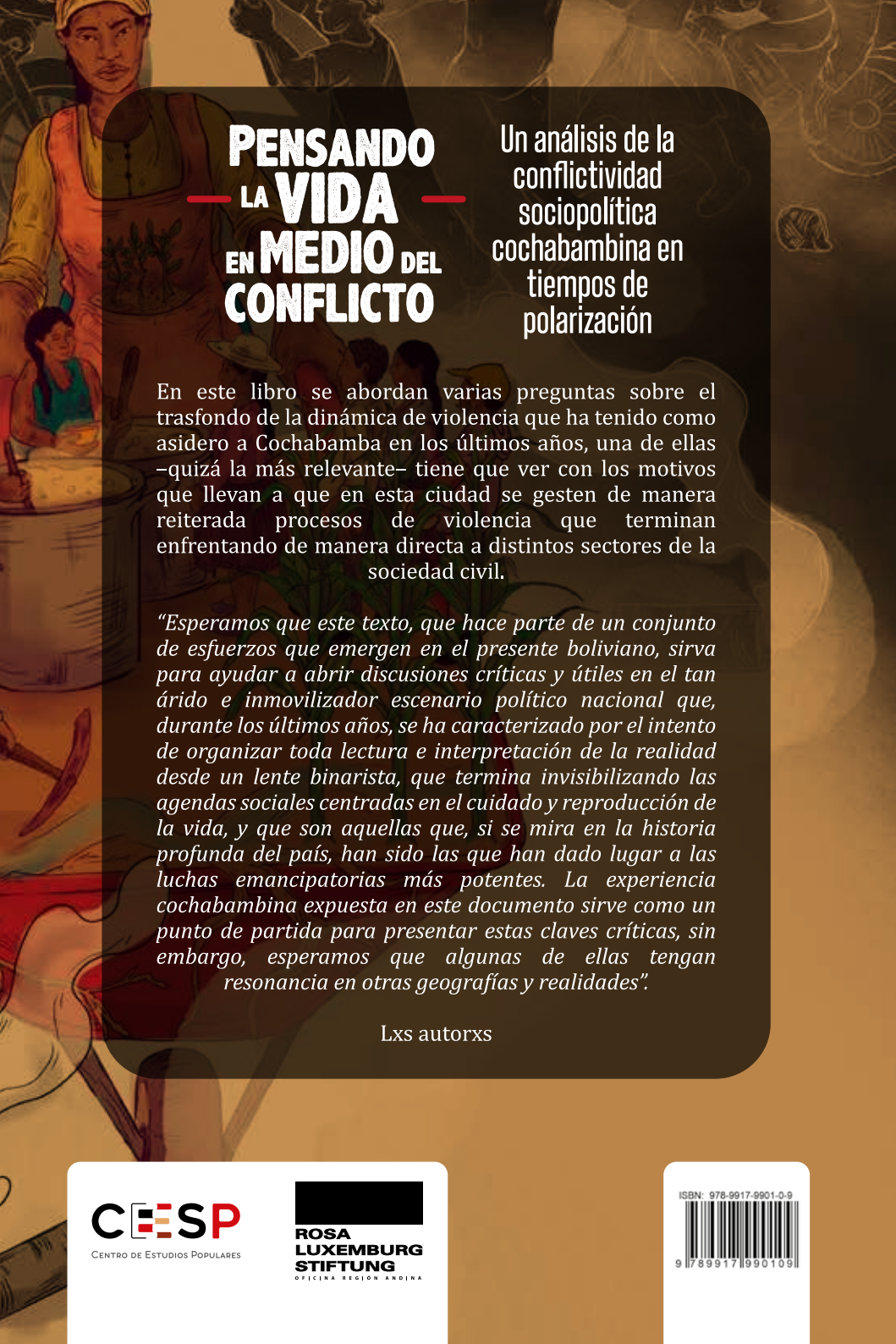
Kruyt, Suzanne. (2006). *From Pachakuti to Another World is Possible. Local and Global Interactions in Social Movement Frames in Bolivia* (Tesis de maestría). Universidad de Amsterdam, Amsterdam.

- Kruyt, Suzanne. (2021). The Deep Rifts in Bolivia's Electoral Crisis. Reflections upon 14 years of a «progressive» government, social movements, conflict and power struggles. *Ritmo*. Recuperado de: <https://www.ritmo.org/The-Deep-Rifts-in-Bolivia-s-Electoral-Crisis>
- Ledo, Carmen, y Agost Felip, María Raquel. (2013). *Desarrollo local: Cochabamba y sus unidades territoriales de planificación*. Cochabamba: CEPLAG.
- Linsalata, Lucía. (2015). *Cuando manda la asamblea. Lo comunitario-popular en Bolivia: una mirada desde los sistemas comunitarios de agua en Cochabamba*. Cochabamba: SOCEE/Autodeterminación.
- McKay, Ben. (2018). *Extractivismo agrario. Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia*. La Paz: TIERRA.
- Murra, John. (1975). *El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas*. En John Murra (Ed.), (pp. 59-115). Lima: IEP.
- OEP y PNUD. (2012). *Atlas Electoral de Bolivia. Referendums 2004-2009* (Vol. II). La Paz: PNUD/TSE.
- Ormachea, Enrique. (2018). *Bolivia: nuevos datos acerca del desarrollo del capitalismo en la agricultura*. La Paz: CEDLA.
- Patzi, Félix. (2007). *Insurgencia y sumisión. Movimientos sociales e indígenas (1983-2007)*. La Paz: Yachaywasi.
- Prudencio, Julio. (2013). *Mitos y falsos debates en el caso agroalimentario boliviano. Una contribución al análisis y la reflexión*. En Julio Prudencio (Ed.), . La Paz: Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras.

- Puente, Rafael. (2019, mayo 10). *¿Se avecina un fraude electoral?*
Página Siete.
- Rivera, Silvia. (2018). *Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rivera, Silvia, y Aillón, Virginia. (2015). *Introducción. Desde los márgenes. Pensadoras y pensadores bolivianxs de la diáspora*. En Silvia Rivera & Virginia Aillón (Eds.), *Antología del pensamiento boliviano contemporáneo*. CLACSO.
- Rodríguez, Gustavo. (1995). *Entre reformas y contrarreformas: Las comunidades indígenas en el Valle Bajo cochabambino (1825-1900)*. En *La construcción de una región. Cochabamba y su historia. Siglos XIX-XX*. Cochabamba: FCES/UMSS.
- Salazar, Fernando. (2008). *De la coca al poder: políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia (1975-2004)*. Buenos Aires: CLACSO.
- Salazar, Huáscar. (2015). *Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS*. Cochabamba: SOCEE/Autodeterminación.
- Salazar, Huáscar. (2020). *Bolivia y el devenir de su descomposición política. Una lectura crítica más allá del polarizado escenario electoral*. Recuperado de: <https://zur.uy/bolivia-y-el-devenir-de-su-descomposicion-politica/>
- Schavelzon, Salvador. (2012). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente*. La Paz: CLACSO/IWGIA/CEJIS/Plural.

- Segato, Rita. (2003). *Las estructuras elementales de la violencia*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Shanin, Teodor. (1976). *Naturaleza y lógica de la economía campesina* (1.ª ed.). Barcelona: Anagrama.
- Tapia, Luis. (1998). *Subsuelo político*. En Luis Tapia (Ed.), *Política Salvaje* (pp. 85-114). La Paz: CLACSO/Muela del Diablo/Comuna.
- Tapia, Luis, y Chávez, Marxa. (2020). *Producción y reproducción de desigualdades. Organización social y poder político*. La Paz: CEDLA.
- Urquiola, Miguel. (1999). *La distribución de la población en el Siglo XX*. En Fern Campero (Ed.), *Bolivia en el Siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea* (pp. 193-218). La Paz: Harvard Club Bolivia.
- Zavaleta, René. (1986). *Lo nacional-popular en Bolivia*. México: Siglo XXI.

La presente edición se terminó
de imprimir en agosto del 2022
en Talleres Gráficos KIPUS
c. Hamiraya 122 • Telf.: (591-4) 4582716/4237448



PENSANDO — LA VIDA — EN MEDIO DEL CONFLICTO

Un análisis de la
conflictividad
sociopolítica
cochabambina en
tiempos de
polarización

En este libro se abordan varias preguntas sobre el trasfondo de la dinámica de violencia que ha tenido como asidero a Cochabamba en los últimos años, una de ellas –quizá la más relevante– tiene que ver con los motivos que llevan a que en esta ciudad se gesten de manera reiterada procesos de violencia que terminan enfrentando de manera directa a distintos sectores de la sociedad civil.

“Esperamos que este texto, que hace parte de un conjunto de esfuerzos que emergen en el presente boliviano, sirva para ayudar a abrir discusiones críticas y útiles en el tan árido e inmovilizador escenario político nacional que, durante los últimos años, se ha caracterizado por el intento de organizar toda lectura e interpretación de la realidad desde un lente binarista, que termina invisibilizando las agendas sociales centradas en el cuidado y reproducción de la vida, y que son aquellas que, si se mira en la historia profunda del país, han sido las que han dado lugar a las luchas emancipatorias más potentes. La experiencia cochabambina expuesta en este documento sirve como un punto de partida para presentar estas claves críticas, sin embargo, esperamos que algunas de ellas tengan resonancia en otras geografías y realidades”.

Lxs autorxs

CEESP
CENTRO DE ESTUDIOS POPULARES

**ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG**
OFICINA REGIÓN ANDINA

ISBN: 978-9917-9901-0-9



9 789917 990109